

En San Miguel, a veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En los autos Rol 30-2024 de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, Rit 107-2023 del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés, y en lo que interesa respecto del recurso, se condenó a **Francisco Javier Solar Domínguez**, ya individualizado, a las siguientes sanciones:

I. **Cuatro penas de doce años de presidio mayor en su grado medio**, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por corresponderle participación en calidad de autor de dos delitos consumados de envío de encomienda explosiva, previstos y sancionados en el artículo 14 D, inciso 1°, parte final, de la ley 17.798, cometidos con fecha 24 de julio de 2019 en la comuna de El Bosque y en calidad de autor de dos delitos consumados de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, previstos y sancionados en el artículo 14 D, inciso 1°, de la ley 17.798, perpetrados con fecha 27 de febrero de 2020 en la comuna de Vitacura.

II. **A la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por corresponderle participación en calidad de autor del delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, en la persona del entonces comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández, cometido con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba

III. **A la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por corresponderle participación en calidad de autor del delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg perpetrado con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Las Condes,

IV. **A la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por corresponderle participación en calidad de autor de un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en



ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba,

V. **A la pena de seiscientos días de presidio menor en su grado medio** y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por corresponderle participación en calidad de autor de un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba.

VI. **A cinco penas de cien días de presidio menor en su grado mínimo**, y a la accesoria suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por corresponderle participación en calidad de autor de cinco delitos consumados de lesiones leves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo Del Carmen Chamorro Salas, ilícitos perpetrados con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba.

VII. **A la pena de ochocientos dieciocho días de reclusión menor en su grado medio**, al pago de una multa de ocho unidades tributarias mensuales y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por corresponderle participación en calidad de autor del delito consumado de daños calificados cometido en dependencias de la 54° comisaría de Carabineros de Chile, ilícito cometido con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba,

En contra de dicha sentencia, Nicolás Toro Venegas y Humberto Lemarie Silva, abogados, en representación del acusado don Francisco Javier Solar Domínguez, interpusieron recurso de nulidad por su representado, invocando las siguientes causales:

**1. Primera causal principal contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal**, en relación al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política del Estado, y en relación al artículo 43 del D.L 518 sobre Establecimientos Penitenciarios.

**2. Segunda causal absoluta de nulidad en subsidio de la primera, prevista en el artículo 374 letra e)** en relación con el artículo 342 letra c) y en



relación con el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, y el delito contemplado en el artículo 391 N° 1 circunstancia 1° en relación al artículo 7, ambos del Código Penal. Se han infringido los principios de la lógica, concretamente, el principio de Razón Suficiente. Lo anterior por cuanto no se probó la operatividad de la pólvora que se encontraba inserta en el cambucho de cartón de la encomienda explosiva enviada a la víctima Rodrigo Hinzpeter en el hecho 1, lo que impide saber que haya sido capaz de comenzar el “tren iniciador” del artefacto, debiendo en definitiva absolverse en base a la imputación formulada en la acusación y recalificar a la figura del artículo 9 en relación al artículo 2 de la ley 17.798.

**3. Tercera causal de nulidad interpuesta en subsidio de la segunda, contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, en cuanto a la errónea aplicación del derecho que se ha hecho en la sentencia del artículo 351 del Código Procesal Penal, en particular respecto a solicitudes de pena referidos a la ley 17.798 y a delitos cometidos con ocasión del hecho 1.

**4. Cuarta causal interpuesta en subsidio de la tercera, contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, en cuanto a la errónea aplicación del derecho que se ha hecho en la sentencia del artículo 17 B de la ley 17.798 sobre control de armas, en relación a la aplicación del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal respecto de los delitos cometido con ocasión del envío de encomiendas explosivas del hecho 1.

**5. Quinta causal interpuesta en subsidio de la cuarta, contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, en cuanto a la errónea aplicación del derecho que se ha hecho en la sentencia del artículo 17 B de la ley 17.798 sobre control de armas, en relación a la aplicación del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal respecto de los delitos cometidos con ocasión del envío de la encomienda explosiva de la 54 ° Comisaria de Huechuraba.

**6 y 7. Sexta y séptima causales interpuestas de manera conjunta, en subsidio de la quinta causal, ambas contempladas en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.** Esta infracción de derecho se consigna, en primer término, como sexta causal, al considerar que su representado es autor del delito de homicidio calificado en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, en perjuicio de Rodrigo Hinzpeter, dejando de aplicar la norma que correspondía, a saber el artículo 391 N° 2 del Código Penal, debiendo haber calificado el delito como homicidio simple en grado de frustrado. Se impetra de manera conjunta con la séptima causal, consistente en la errónea aplicación de la agravante contemplada en el artículo 12 N° 1 del Código Penal respecto del delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en



ejercicio de sus funciones en desmedro del entonces Comisario Manuel Guzmán Hernández.

**8. Octava causal en subsidio de las causales sexta y séptima, asilada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por la errónea no aplicación de la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

**9. Novena causal en subsidio de la causal octava, prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, en este caso referida a la equivocada no admisión de la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

La defensa direccionó el recurso para ante la Excm. Corte Suprema, y ese tribunal por resolución de dos de enero de dos mil veinticuatro recondujo la primera causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal, a la causal de la letra e) del artículo 373 del mismo texto, redirigiendo el libelo ante esta Corte de Apelaciones de San Miguel.

Habiéndose estimado admisible el recurso en la audiencia respectiva, Intervinieron, por la defensa de Francisco Solar Domínguez el abogado Humberto Lemarie Silva, por el Ministerio Público el abogado Claudio Orellana Sepúlveda, por los querellantes Manuel Guzmán, José Aguayo y Estefanía Contreras el abogado David Inostroza Vargas, por la Ilustre Municipalidad de Vitacura el abogado Santiago Fernández Collado, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el abogado Francisco Castro Salgado, por Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg el abogado Christian San Martín Toledo y por Tanica S.A. el abogado José Jara Gutiérrez, y se fijó para la comunicación del fallo el día de hoy.

En dicha audiencia, la defensa del condenado Francisco Solar Domínguez, se desistió de la primera y novena causales de nulidad interpuestas. Esto es, la relativa al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política del Estado, y en relación al artículo 43 del D.L 518 sobre Establecimientos Penitenciarios. Y la causal concerniente al artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, referida a la errónea no aplicación de la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Se escuchó también oportunamente en estrado, a pedido de la defensa del encartado, las pistas del registro de audio de la audiencia de juicio, que estimó relevantes dicha parte.

**Con lo oído y considerando:**

**I. Cuestiones previas:**

**Primero:** Que corresponde preliminarmente dejar clarificado ciertos aspectos que han de ser útiles como marco genérico para el pronunciamiento sobre el recurso de nulidad que ha deducido la defensa del condenado Francisco Javier Solar Domínguez.



Estas circunstancias de contexto son:

**A. Sucesos acreditados por los jueces de grado.**

Que, según los hechos que se han dado por acreditados en la reflexión octogésima primera de la sentencia, en lo que interesa al recurso, se estableció lo siguiente:

*“Hecho N° 1: En el que se presentó acusación sólo respecto de Francisco Javier Solar Domínguez. El día 24 de julio de 2019, en horas de la mañana, Francisco Javier Solar Domínguez envió, utilizando para ello como remitente la identidad de Sandra Mutis Tapia, R.U.T. N° 12.511.565-9, desde la sucursal de la empresa Correos de Chile ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 10.226 de la comuna de El Bosque, dos encomiendas contenedoras, cada una de ellas, de un artefacto explosivo construido de tal modo que se activara mediante la apertura por parte de su destinatario. Tanto para llegar a la sucursal de la empresa Correos de Chile, como para retirarse de la misma, Solar Domínguez hizo uso de diversos taxis básicos que abordó en la vía pública. Las encomiendas quedaron sujetas al proceso postal normal para su despacho por parte de la empresa Correos de Chile, el que fue desarrollado íntegramente.*

*Una de las encomiendas fue enviada a Manuel Guzmán Hernández, Mayor de Carabineros y Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros a la época de los hechos, ubicada en Avenida Recoleta N° 5573 de la comuna de Huechuraba, quien la recibió alrededor de las 12.40 horas del día 25 de julio de 2019 en su oficina donde se hallaba con el Cabo 1° de Carabineros José Luis Aguayo Montiel y, al abrirla, produjo la activación del artefacto explosivo y su detonación, la que provocó, además de daños materiales de consideración en la unidad policial, lesiones de distinta entidad a los siguientes funcionarios policiales de Carabineros que se hallaban en ejercicio de sus funciones al momento de los hechos: Manuel Leonel Guzmán Hernández, Mayor de Carabineros, lesiones de carácter simplemente grave consistentes en politraumatismo, traumatismo ocular derecho, edema intraocular, trauma acústico, perforación microscópica de tímpano derecho, fractura nasal, fractura del segundo y quinto metacarpiano de mano derecha; José Luis Aguayo Montiel, Cabo 1° de Carabineros, lesiones de carácter simplemente grave consistentes en herida compleja de antebrazo derecho, queratitis y cuerpos extraños múltiples en ojos, trauma ocular bilateral, contusión torácica, herida contusa antebrazo, cefalea post-explosión; Erika del Rosario Bravo Aravena, Sargento 1° de Carabineros, lesiones de carácter menos grave consistentes en contusión craneana occipital, esguince cervical, contusión hombro izquierdo, trauma acústico, policontusiones; Estefanía Elena Contreras Parra, Cabo 2° de Carabineros, lesiones de carácter leve consistentes en congestión*



de la mucosa nasal, laringe, amígdalas congestivas, trauma acústico y esguince cervical; José Ignacio González Parra, Cabo 2° de Carabineros, lesiones de carácter leve consistentes en traumatismo acústico; Valeria Yazmín Alvarado Marín, Carabinero, lesiones de carácter leve consistentes en policontusión, trauma acústico y contusión superficial de brazo derecho; Camila Andrea Chaparro Salas, Subteniente de Carabineros, lesiones de carácter leve consistentes en trauma acústico derecho, desviación de tabique nasal y omalgia o síndrome de hombro doloroso por contusión superficial; y Hugo del Carmen Chamorro Pinto, Suboficial Mayor de Carabineros, con lesiones de carácter leve consistentes en reacción por estrés agudo, trauma acústico y traumatismo laríngeo. Los daños ocasionados ascendieron a la suma de \$684.582 (seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos) y consistieron fundamentalmente en rotura de vidrios, de tabiques, de planchas de cielo, de elementos de iluminación y pintura.

Este artefacto explosivo estaba conformado fundamentalmente por un cilindro metálico tipo niple, contenedor de pólvora negra como sustancia explosiva y un sistema de activación eléctrico, mediante tracción compuesto de una batería de 9 voltios, interruptor eléctrico, pinza de madera, cables conductores, elementos de fijación, todo lo cual se hallaba al interior de una caja de madera.

La segunda de las encomiendas fue enviada a Rodrigo Hinzpeter Kirberg, a su domicilio laboral ubicado en calle Enrique Foster Sur N° 20, piso 14 de la comuna de Las Condes, destinatario al que efectivamente llegó la encomienda el día 25 de julio de 2019, alrededor de las 10.30 horas, encomienda que no abrió, logrando el artefacto explosivo ser desactivado por personal policial del Gope de Carabineros.

Este artefacto explosivo estaba conformado fundamentalmente por un cilindro de plástico, contenedor de 105 gramos de dinamita como sustancia explosiva y un sistema de activación eléctrico, mediante tracción, compuesto de una batería de 9 voltios, interruptor eléctrico, ampolleta, mecha industrial, detonador mecánico, pinza de madera, cables conductores, elementos de fijación, todo lo cual se hallaba al interior de una caja de madera.

Hecho N° 2: En el que se presentó acusación respecto de Solar Domínguez y Caballero Sepúlveda. El día 26 de febrero de 2020, en horas de la noche, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda y Francisco Javier Solar Domínguez ingresaron caracterizados al denominado Hotel o Motel Tropical ubicado en calle Chacabuco N° 52 de la comuna de Santiago, llevando consigo, ocultos en una bolsa, dos artefactos explosivos de fabricación artesanal. Mónica Andrea Caballero Sepúlveda llevaba consigo, además, un bolso con vestimentas y elementos de caracterización adicionales que ambos emplearon al día siguiente.



*El día 27 de febrero de 2020, en horas de la mañana, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda y Francisco Javier Solar Domínguez abandonaron el denominado Hotel o Motel Tropical, caracterizados de manera distinta a la de su ingreso, llevando consigo al interior de una bolsa, dos artefactos explosivos de fabricación artesanal, con los cuales se dirigieron a la comuna de Vitacura, llegando pasadas las 10.00 horas a aproximadamente 300 metros de distancia del Edificio Tánica, ubicado en Avenida Santa María N° 5888 de la comuna de Vitacura.*

*Mónica Andrea Caballero Sepúlveda llevaba consigo, adicionalmente, dos bolsos con elementos de caracterización utilizados por Francisco Javier Solar Domínguez para dirigirse al lugar de colocación de los artefactos explosivos. Realizado lo anterior, Francisco Javier Solar Domínguez inició su traslado a pie hasta el lugar de colocación de los artefactos explosivos, en tanto Mónica Andrea Caballero Sepúlveda se dirigió a la zona poniente de Santiago, llegando a dicho sector sin los dos bolsos antes referidos, como tampoco con las vestimentas con las que hizo abandono del denominado Hotel o Motel Tropical.*

*Por su parte, Francisco Javier Solar Domínguez ingresó al sector de los jardines, de libre acceso al público, del Edificio Tánica ubicado en Avenida Santa María N° 5888 de la comuna de Vitacura, donde colocó y activó dos artefactos explosivos de fabricación artesanal.*

*El primer artefacto explosivo lo colocó y activó a las 10 horas, 26 minutos y 59 segundos (horario oficial) detrás de un banco de cemento o concreto, el que detonó a las 12 horas, 08 minutos y 35 segundos (horario oficial). Dicho artefacto consistía en un contenedor metálico consistente en una olla a presión con capacidad nominal de diez litros, que como sustancia explosiva contenía pólvora negra, activado por un sistema eléctrico compuesto en líneas generales por cablería, ampolleta, reloj análogo y batería eléctrica, todo oculto al interior de una caja de cartón.*

*El segundo artefacto explosivo lo colocó y activó a las 10 horas, 28 minutos y 04 segundos (horario oficial) dentro del recipiente de un basurero, el que detonó a las 12 horas, 32 minutos y 29 segundos (horario oficial). Este artefacto consistía en un contenedor metálico cilíndrico correspondiente a un extintor de incendios con capacidad nominal de un kilo aproximadamente, que como sustancia explosiva contenía pólvora negra, activado por un sistema eléctrico compuesto en líneas generales por cablería, ampolleta, reloj análogo y batería eléctrica, todo oculto al interior de una bolsa de género.*

*Para los diversos traslados realizados por Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda los días 26 y 27 de febrero de*



2020, hicieron uso en conjunto y por separado de diversos medios de locomoción pública del tipo taxis básicos, taxi colectivo, buses y Metro”.

**B. Ilícitos que se dan por configurados, en lo que interesa al recurso.**

Que los hechos así considerados, entiende el fallo en el basamento octogésimo segundo, configuran los siguientes delitos:

*“En cuanto al hecho N° 1:*

*a).- Dos delitos consumados de envío de encomienda explosiva, previsto y sancionado en el artículo 14 letra D, inciso 1°, parte final de la Ley 17.798;*

*b).- Un delito frustrado de homicidio de Carabinero que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, respecto de Manuel Leonel Guzmán Hernández;*

*c).- Un delito consumado de lesiones graves de Carabinero que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 bis N° 2 del Código de Justicia Militar, respecto de José Luis Aguayo Montiel;*

*d).- Un delito frustrado de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 número 1°, circunstancia primera, del Código Penal, respecto de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg;*

*e).- Un delito consumado de lesiones menos graves a Carabinero que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 bis, N° 3 del Código de Justicia Militar, respecto de Erika del Rosario Bravo Aravena;*

*f).- Cinco delitos consumados de lesiones leves a Carabineros que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 bis, N° 4° del Código de Justicia Militar, respecto de Estefanía Elena Contreras Parra; de José Ignacio González Parra; de Valeria Yazmín Alvarado Marín; de Camila Andrea Chaparro Salas y de Hugo del Carmen Chamorro Pinto;*

*g).- Un delito consumado de daños calificados, previsto y sancionado en el artículo 486 inciso 1° en relación con el artículo 485 N° 1 del Código Penal; y*

*h).- Dos delitos consumados de usurpación de identidad, previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal.*

*En cuanto al hecho N° 2: Dos delitos consumados de colocación y activación de artefactos explosivos desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, previsto y sancionado en el inciso 1° del artículo 14 letra D de la Ley 17.798”.*

**C. Causales desistidas por la defensa del recurrente y aquellas pendientes de resolver.**



Que, también de modo previo, ha de señalarse que esta Corte se pronunciará, en su caso, únicamente sobre las causales individualizadas precedentemente y signadas como segunda a octava en el recurso. Habida cuenta que la defensa del acusado se desistió en la audiencia que se llevó a efecto ante este tribunal de las causales primera y novena de su libelo de nulidad, esto es aquella contemplada en el artículo 373, letra a), direccionada por la Excma. Corte Suprema a la letra e) del artículo 374, y de la causal del artículo 373 letra b), todo del Código Procesal Penal, esta última vinculada a la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

**II: Recurso de la defensa por las causales subsistentes, luego del aludido desistimiento de la defensa:**

**Causal segunda del libelo, asilada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal.**

**Segundo:** Que, consecuentemente, el recurso interpuesto a favor de Francisco Solar Domínguez se sustenta, en una primera causal en análisis, al vicio de nulidad contemplado en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, atendido el hecho que la sentencia, habría omitido cumplir con los requisitos previstos en el artículo 342, letras c) y del artículo 297 inciso 1° del mismo texto.

En efecto, se circunscribe la causal a que para alcanzar el grado de convicción legal sobre la ejecución del delito de homicidio calificado en grado de frustrado y el delito de envío de encomienda explosiva de acuerdo a lo reglado en el artículo 14 letra D de la ley N° 17.798, los sentenciadores incurrieron en errónea valoración de los medios de prueba rendidos en juicio oral, por cuanto infringieron los principios de la lógica, específicamente: el principio de razón suficiente, en orden a que “todo conocimiento debe estar suficientemente fundado”.

Se refiere el libelo, enseguida, a la declaración de dos peritos, el Sr. José Ferrada Macaya quien depuso respecto del Informe detector de explosivo N° 17, de fecha 25 de julio de 2019, anexo al informe pericial sobre artefacto explosivo de fabricación artesanal desactivado N° 29 de fecha 26 de octubre de 2019, emanado del Gope, y de la perito doña Gabriela Valdebenito Zenteno quien depuso sobre el Informe pericial de química forense N° 6593-03-2019 emanado de Labocar.

Habría quedado demostrado -se dice- que la encomienda explosiva enviada al Sr. R. Hinzpeter, de acuerdo al Informe Pericial N°29 sobre Artefacto Explosivo de fabricación artesanal desactivado, presentado por el Capitán Arnaldo Carrasco Durán, estaba compuesta por un tubo de PVC, al interior de una caja de madera, que contenía 105 gramos de dinamita, un detonador mecánico con un trozo de mecha industrial, y un cartón de forma cónica con pólvora negra en su interior en contacto con los filamentos de una pequeña ampolleta fracturada, formando de



esta manera una cadena sujeta a reacción. El sistema de activación, funcionaba primero levantando la aldaba que figuraba como seguro de la caja contenedora del tubo de PVC, para luego abrir la tapa traccionándola hacia atrás, lo que a su vez sacaba el cartón inserto en un perro de ropa que servía de aislante de la corriente. Una vez que los cables estaban en contacto, la energía se dirigía a los filamentos de la ampolleta, los cuales debían encender la pólvora, y de esa manera dar comienzo a una reacción en cadena ya que esta encendía a su vez el trozo de mecha industrial con el detonador mecánico, para luego iniciar la carga principal de dinamita, lo que provocaba la explosión del artefacto. Cabe destacar que respecto del trozo de mecha industrial y el detonador mecánico, según los peritos que depusieron, estos elementos son de fabricación industrial y traen incorporados en ellos sustancias explosivas, como la pólvora negra, por lo que se puede concluir que las sustancias explosivas de estos elementos, es distinta a la contenida en el trozo de cartón de forma cónica.

Ahora, agrega, que de acuerdo a lo expuesto por el perito José Ferrada en relación a la evidencia E-3.2, consistente en la sustancia en el interior del trozo de cartón de forma cónica, este determinó, mediante el detector MMTD, detector de modalidades múltiples, la existencia de pólvora negra. Lo anterior, en una primera oportunidad durante su exposición, cuando se le exhibe la lámina 26, correspondiente al OMYEM 44 correlativo 42, y en una segunda oportunidad durante el examen del Ministerio Público al explicar que existía una mezcla de diversos compuestos al efectuar el análisis de la muestra referida, refiriendo de esa manera a la existencia de tres sustancias explosivas, señalando que se mezclaron las sustancias explosivas al momento de hacer el levantamiento desde la sustancia granulada, esto es el nitrato, nitroglicerina y pólvora negra. Posteriormente, en una tercera oportunidad, al ser consultado por los sentenciadores, da cuenta de que si bien se indicaba la presencia de tres sustancias en la evidencia E-3.2, esta se debía a la contaminación cruzada producto de la mezcla que debió producirse al confeccionar el artefacto.

La perito química Gabriela Valdebenito Zenteno en el Informe Pericial N° 6593-03-2019, indicó que a petición del capitán Patricio Vega Vera, se solicitó detectar la presencia de sustancias de naturaleza explosiva, evidencia analizada mediante microscopía infrarroja, determinando que la sustancia explosiva al interior del cartón cónico era pólvora negra, evidencia E-3.2, misma evidencia periciada por el perito José Ferrada.

De esta manera, se expone, ambas pericias realizadas respecto de la evidencia correspondiente a E-3.2, tenían por objeto determinar la naturaleza de la sustancia explosiva, no si estaba en buenas condiciones u operativa. Ninguna de



estas pericias determina además los compuestos de la pólvora negra, lo anterior debido a que esta se puede realizar de forma casera, combinando diversas sustancias. Ninguna de estas pericias, en cuanto a su equipo y forma de análisis, consistía en la combustión de dicha sustancia, como señala el fallo, según el parecer del Tribunal. En ninguna de las pericias referidas los peritos dieron cuenta de que la sustancia se encontraba en condiciones de reaccionar de acuerdo a su naturaleza.

La pregunta que cabe hacerse según la defensa, es: ¿por qué respecto del resto de sustancias y componentes de la encomienda explosiva se realizaron pruebas de operatividad y buen funcionamiento, y respecto de la pólvora negra no se realizó prueba alguna?.

Esto es, a su parecer, importante debido a que si la pólvora negra no estaba en condiciones de ser activada por motivos de conservación o propiamente de funcionamiento, no podría haberse producido la reacción en cadena para activar la carga explosiva principal del artefacto, y por ende no habría detonado.

Sobre este punto, la defensa solicitó tener en consideración lo referido por el perito Arnaldo Carrasco quien, ante la consulta de la existencia de pólvora mojada, refirió que la pólvora también debía estar en buenas condiciones.

Lo anterior concuerda además con las características de la pólvora señalada por el perito Mario Espinoza Muñoz, especialmente en lo relativo a su alta capacidad higroscópica (absorción de agua y humedad), lo que se condice con la imagen N° 10 incorporada por la defensa, obtenida de las Escuelas de las Américas, dándole en definitiva la característica de pobre resistencia al agua. No siendo esto cuestionado por los acusadores.

Aquello, se afirma, no fue valorado por el Tribunal Oral, tampoco se argumentó por qué se desechó lo declarado por Arnaldo Carrasco y Mario Espinoza Muñoz sobre este punto. Por lo tanto, la pólvora negra debía probarse, por quien llevaba la investigación, de que esta era idónea para lograr la consumación ya que de lo contrario se castigaría la mera voluntad criminal.

Respecto de que la defensa no haya cuestionado a los peritos Ferrada y Valdebenito, responde a que sólo dieron cuenta de la naturaleza de la sustancia explosiva, en ningún caso sobre si esta sustancia explosiva estaba en condiciones de ser utilizada ya que escapaba del ámbito de su informe, siendo el único elemento que conformaba el artificio que no fue periciado sobre su operatividad.

Esto trae como consecuencia según la defensa, a modo de influencia del vicio, que deba recalificarse el delito de envío de encomiendas explosivas por la infracción al artículo 9 de la ley 17.798 que castiga el porte o tenencia de elementos regulados en la letra d) del artículo 2 de dicho cuerpo normativo, como



a su vez absolverse del homicidio frustrado calificado a R. Hinzpeter, por ser una tentativa absolutamente inidónea en relación a los medios utilizados.

Cabe hacer presente que las alegaciones del ente persecutor y querellantes al respecto se fundaban en que la pólvora negra del interior del cartón de forma cónica, podría haber correspondido a la misma utilizada en la encomienda explosiva dirigida al entonces comisario Guzmán en la 54° Comisaria de Huechuraba.

De acuerdo a todos los elementos mencionados, se construye una duda razonable, articulada en base a la prueba de cargo, de que la encomienda enviada a Rodrigo Hinzpeter estaba o no, en condiciones de ser utilizada para su fin.

Sostiene el libelo, por último, que aquello no es razón suficiente para formar convicción más allá de toda duda razonable respecto de los puntos señalados anteriormente.

**Causal tercera subsidiaria del recurso, de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 351 del mismo texto.**

**Tercero:** Argumenta la defensa la eventual infracción al artículo 351 del Código Procesal Penal de la siguiente manera:

**Primer aspecto:**

Que solicitó la aplicación de la figura de la reiteración delictiva de conformidad al artículo 351 del Código Procesal Penal en relación a las 4 infracciones a la ley 17.798 por las cuales fue condenado Francisco Solar Domínguez, para efectos de que se aumente, de acuerdo a la regla de la exasperación, en un grado la pena, llegando así a presidio mayor en su grado máximo.

Se precisa que la pena por el delito de envío de encomienda explosiva, previsto y sancionado en el artículo 14 D, inciso 1°, parte final, de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en abstracto es la misma que la corresponde a la del delito de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, previsto y sancionado en el inciso 1° del artículo 14 D de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, fijada en presidio mayor en su grado medio.

Sostuvo la defensa el aumento en un grado de la pena, en base al análisis realizado por el profesor Martín Besio en el texto: *“Aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal”*, en virtud del cual el aumento en dos grados debería realizarse desde la quinta reiteración, lo cual tiene asidero en la mayoría de la jurisprudencia relacionada con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

En particular se destacó la causa **RIT 303-2021 del Sexto Tribunal Oral en lo penal de Santiago**, es decir el mismo tribunal del presente caso, **en la cual se**



**aplicó la figura de la reiteración delictiva mediante el artículo 351 del Código Procesal Penal, a 4 infracciones a la ley de control de armas, incluyendo un envío de encomienda explosiva y tres colocaciones de artefactos explosivos,** ocurridos entre el año 2017 y 2019, en la cual se aumentó en un grado la pena, es decir; a presidio mayor en su grado máximo, siendo esto coherente con la constante jurisprudencia sobre la materia.

En concreto, por estos delitos se pidió la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, tomando en consideración que no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal aplicables.

Reprocha que el tribunal, haciendo una errónea interpretación del artículo 351 del Código Procesal Penal, estimó que por el número de infracciones correspondía subir la pena en dos grados en el caso de aplicar esta norma, por lo que prefirió acumular materialmente los delitos en razón del artículo 74 del Código Penal, aplicando en definitiva 4 penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio, contraviniendo el razonamiento mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia que plantea que el aumento de dos grados operaría recién desde la quinta reiteración.

Se consigna que resulta “curioso” que, en razón de la idea de la humanidad de las penas, el tribunal sí haya accedido a aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal en relación a los **dos delitos de colocación de artefacto explosivo** desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, regulados en el artículo 14 D de la ley 17.798, en virtud de los cuales fue condenada Mónica Caballero Sepúlveda en calidad de cómplice en este mismo juicio, y no haya hecho lo mismo con su representado en relación al hecho uno y dos por separado, optando por castigar a Solar Domínguez a 4 penas independientes de 12 años de presidio mayor en su grado medio por cada infracción a la ley de control de armas, sumando un total de 48 años por estos delitos. Lo anterior es evidentemente superior a la suma de dos penas por delitos reiterados de envío de encomiendas explosivas más colocación y activación de artefactos explosivos, en virtud del cual tendríamos un rango de pena que varía en entre los 30 años y 2 días a 40 años, evidentemente inferior al cálculo que hizo el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, derechamente en perjuicio del acusado.

#### **Segunda vertiente:**

Además de la solicitud anterior, en relación a la transgresión del artículo 351 del Código Procesal Penal, la defensa solicitó la aplicación de esta norma respecto de los siguientes delitos por los cuales fue condenado en calidad de autor: 1- Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, con la agravante de alevosía de artículo 12 N° 1 del



Código Penal, en la persona del, en ese entonces, Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández. 2- Un delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg perpetrado en la comuna de Las Condes. 3- Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel en la comuna de Huechuraba. 4- Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones ejecutado en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena en la comuna de Huechuraba.

El fundamento jurídico de la acumulación solicitada vía artículo 351 del Código Procesal Penal, es que todos los delitos antes nombrados tienen el mismo bien jurídico base, el cual corresponde a la vida y salud de las personas.

Entiende que las infracciones a los artículos 416 y 416 BIS del Código de Justicia Militar que se pretende acumular jurídicamente vía artículo 351 del Código Procesal, en conjunto con el homicidio calificado en grado frustrado a la víctima Rodrigo Hinzpeter, además de proteger la vida y salud de las personas, protegen el bien jurídico del ejercicio de la función pública, existe consenso mayoritario en la doctrina de que concurriendo un bien jurídico en común, es posible aplicar la regla de la exasperación del artículo 351 del Código Procesal Penal entre diversos delitos.

Se justifica en los dichos del profesor Jean Pierre Matus Acuña en su texto: *“Proposiciones respecto de las cuestiones no resueltas por la Ley N° 20.084 en materia de acumulación y orden de cumplimiento de las penas”, donde señala lo siguiente respecto del artículo 351 del Código Procesal Penal: “... la aplicación de esta regla, que no contiene una definición de bien jurídico operativa, producirá diversas interpretaciones, particularmente por el hecho de que muchos delitos no protegen “un” único bien jurídico, sino varios y que, aunque se dé el caso de dos o más delitos que protejan “un” mismo bien jurídico, nada impide que cada uno de ellos proteja o no, además, otros bienes jurídicos. Para estos casos, también podría ser posible extender la aplicación de este artículo a los supuestos en que, existiendo delitos que afecten más de “un mismo” bien jurídico, al menos tengan en común la protección de “un mismo” bien jurídico de entre todos los afectados, como sería el caso de reiteración de delitos contra la propiedad (hurtos y robos) o incluso, entre robos violentos con lesiones y homicidios, según los casos, siendo aquí el “mismo bien jurídico” protegido la vida y la salud de las personas, y no la propiedad...”*



En el mismo sentido, en relación al artículo 351 del Código Procesal Penal, el profesor Guillermo Oliver Calderón en su texto: *“La exasperación de la pena en el concurso material de delitos: la reiteración de delitos de la misma especie.”*, señala lo siguiente: *“... Según mi opinión, el recurso a la función sistemática de los bienes jurídicos, conforme a la cual el legislador clasifica los distintos delitos dentro del Código Penal, permite sostener que no es necesaria una identidad exacta de bienes jurídicos afectados para considerar dos o más delitos como pertenecientes a una misma especie. Téngase en cuenta que la anterior definición de delitos de la misma especie se basaba, precisamente, en un criterio sistemático y que no era criticada por ello, sino por las indeseables consecuencias que en ocasiones producía el modo excesivamente formal en que estaba consagrado. Atender a la función sistemática de los bienes jurídicos serviría entonces para “rescatar” el aspecto útil de la regulación anterior. Debido a esta función el legislador podría agrupar conjuntamente diversos delitos, aunque sus bienes jurídicos coincidieran solo parcialmente, nada impide aplicar la regla de determinación de pena de la reiteración de delitos de la misma especie a hipótesis de varios delitos pluriofensivos. Lo único que se requiere es que en todos los delitos concurrentes exista, al menos, un mismo bien jurídico común...”*.

Se cuestiona que el Sexto Tribunal Oral en lo Penal, justamente en relación a este punto, señala en el considerando centésimo décimo tercero, que no resulta procedente sancionar conjuntamente los delitos pretendidos por la defensa vía artículo 351 del Código Procesal Penal, ya que las infracciones a los artículos 416 y 416 BIS del Código de Justicia Militar, además de proteger la vida, protegen la afectación del orden público y la seguridad pública, por corresponder las víctimas a funcionarios de Carabineros de Chile, haciendo nuevamente una interpretación errada y desfavorable, lo cual implicó una sanción inédita a su representado por todos los delitos que la defensa pretendía acumular por esta vía, no permitiéndole operatividad alguna a la norma antes citada.

#### **Petición:**

Se pide rectificar los errores de derecho, anulando la sentencia recurrida, y dictando otra de reemplazo en la que se condene a: **La pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo**, vía aplicación de la regla de exasperación del artículo 351 del Código Penal, por las 4 infracciones a la ley de control de armas por las cuales fue condenado su representado, **o a dos penas de 15 años y 1 día** por la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal por cada delito reiterado de la ley de 17.798 en virtud de los cuales fue condenado, es decir; envío de encomienda explosiva, y colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, tal



como se hizo con la coimputada Mónica Caballero Sepúlveda. Lo anterior sin perjuicio de otra pena que determine aplicar.

**La pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo**, o la pena que determine aplicar en razón del artículo 351 del Código Procesal Penal, por la reiteración de los siguientes delitos: 1- Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, con la agravante de alevosía de artículo 12 N° 1 del Código Penal, en la persona del entonces Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández. 2- Un delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg. 3- Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel. 4- Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena.

Cabe destacar que la presente solicitud de pena, se hace por la defensa de conformidad al inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal, entendiendo que la pena que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tiene asignada una pena mayor, en este caso corresponde a la pena del delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, en la persona del entonces, Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández, la cual fue mensurada en el máximo del rango de pena dentro del presidio mayor en su grado medio, es decir; en 15 años, concurriendo la agravante de alevosía de artículo 12 N° 1 del Código Penal. Por lo que, aumentada esta pena en un grado de conformidad al inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal, después de la depuración respectiva de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, se llega a una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.

**Causal cuarta subsidiaria en el libelo, de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, relativa a la transgresión del artículo 17 B de la Ley 17.798, y referida a su vez al concurso ideal del artículo 75 del Código Penal**

**Cuarto:** Que la defensa solicitó la aplicación del concurso ideal, de conformidad al artículo 75 del Código Penal, por el delito de daños calificados, en conjunto con todas las infracciones al Código de Justicia Militar con ocasión de la explosión de la encomienda en la 54° comisaría de Huechuraba, y del homicidio calificado en grado de frustrado a la víctima Rodrigo Hinzpeter, en base a que



todos los delitos antes mencionados por los cuales fue condenado Francisco Solar provienen de un mismo hecho.

Se trata de una entrega de encomiendas explosivas en una sucursal de la empresa correos de Chile, realizadas por un sujeto en un mismo momento, es decir; representan una pluralidad delictiva que provienen de sólo un acto, y que expresan, en términos del profesor Etcheberry, una única decisión en contra del ordenamiento jurídico por parte del autor, ocurrida el día 24 de julio de 2019.

Por su parte el artículo 75 del Código Penal señala lo siguiente: *“La disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. En estos casos solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave”*.

Al entender de la defensa, la situación antes esbozada responde justamente a lo descrito por el artículo 75 del Código Penal, respecto a que un solo hecho constituye dos o más delitos, contando con la opinión favorable de la mayoría de la doctrina penal en nuestro país en relación a la aplicación del concurso ideal en casos similares donde existe una pluralidad de resultados delictivos diversos, producto de una acción. En este sentido se pronuncian los profesores Cury, Etcheberry y Bustos, con críticas de lege ferenda por parte de Cury, como puede desprenderse del análisis realizado por el profesor Jaime Couso en el Código Penal Comentado.

Lo anterior también se ha aceptado por la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, como queda claro en la causa Rol 20.900-2020, en la cual se aplica esta figura penal a un manejo en estado de ebriedad con dos resultados de muerte. Situación similar se da en el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en la causa Rol 129-2017. Cabe destacar dentro de la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, lo razonado en el considerando trigésimo primero de la causa Rol 2596-09 de fecha 8 de julio de 2010, relacionado con el caso Prats, referido al asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats como de su cónyuge, Sofía Cuthberth, mediante la colocación de un artefacto explosivo de gran potencia, en la cual el máximo tribunal de nuestro país razona que precisamente es posible aplicar la figura del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal al caso, ya que con un mismo hecho se realiza más de una vez un tipo penal, como por ejemplo cuando un disparo da muerte a dos personas, o cuando resulta más de una persona fallecida a través del uso de una granada, citándose para estos efectos las obras de los profesores Cury, Bustos y Garrido Montt.



En base a lo anterior, considerando la regla de absorción agravada del artículo 75 del Código Penal en virtud de la cual se debe aplicar la pena más grave del delito más grave, en el caso concreto, su representado debió ser condenado a una pena única de 15 años de presidio mayor en su grado medio, correspondiente al delito de homicidio frustrado de carabinero en ejercicio de sus funciones de la víctima Manuel Leonel Guzmán Hernández, por todos los delitos a los cuales solicita aplicación del concurso ideal.

De acuerdo al tenor literal del artículo 17 B de la ley 17.798, las penas que correspondan en razón de los delitos castigados por este cuerpo normativo, se aplican de manera independiente de las que se impongan, a su vez, por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando los artefactos regulados en la ley de control de armas.

Pero lo anterior en ningún momento implica, como razona erradamente el tribunal, que los delitos que se cometan empleando las armas u artefactos, deban acumularse materialmente entre sí de acuerdo al artículo 74 del Código Penal, impidiendo la regla de absorción agravada del concurso ideal establecido en el artículo 75 del Código Penal.

Como bien destaca la profesora Myrna Villegas en su texto; *“La Ley N°17.798, sobre control de armas. Problemas de aplicación tras la reforma de la Ley N°20.813”*, la doctrina interpreta restrictivamente la regla del inciso primero del artículo 17 B de la ley de control de armas para efectos de morigerar sus efectos, lo cual se contradice totalmente a la interpretación de la misma norma que hace el Sexto Tribunal Oral en lo Penal en este caso, la cual favorece la aplicación de penas altísimas e inéditas en delitos de índole en contra del imputado.

Por último, en relación a este punto, la interpretación del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, contravendría el artículo 5 del Código Procesal Penal, en virtud del cual toda restricción de libertad o derecho debe ser interpretada restrictivamente.

En conclusión, solicita se condene a su representado a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, vía aplicación del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal, o la que se considere ajustada a derecho, por los siguientes delitos: 1. Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones en la persona del, en ese entonces, Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández. 2. Un delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg. 3. Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel. 4.



Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena. 5. Cinco delitos consumados de lesiones leves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo del Carmen Chamorro Salas, y 6. Un delito consumado de daños calificados cometido en dependencias de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile.

**Causal quinta subsidiaria del recurso, según el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en cuanto a la errónea aplicación del derecho que se ha hecho en la sentencia del artículo 17 B de la ley 17.798 sobre control de armas, en relación al artículo 75 del Código Penal, en particular sobre la aplicación del concurso ideal respecto a los delitos cometidos con ocasión de Ley de Control de Armas ocurridos en la 54° comisaria de Huechuraba.**

**Quinto:** Que la defensa solicitó, en subsidio de la petición sobre concurso ideal planteada precedentemente en el recurso de nulidad, la aplicación de la figura regulada en el artículo 75 del Código Penal, sólo en relación a los delitos que fueron resultado del envío de la encomienda explosiva al comisario Manuel Leonel Guzmán Hernández de la 54° comisaría de Huechuraba por los cuales fue condenado Solar Domínguez.

A su juicio, todos los delitos antes mencionados materia de esa condena provienen de un mismo hecho, en particular en este caso y de manera indiscutida, a la pluralidad delictiva que se produce como resultado de sólo un envío de encomienda explosiva, correspondiente a la del comisario Manuel Leonel Guzmán Hernández de la 54° comisaría de Huechuraba, ocurrido el día 24 de julio de 2019.

Reitera en este aspecto la doctrina de los autores Cury, Bustos, Garrido Montt, Etcheberry y Jaime Couso, como la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica.

En base a lo anterior, considera la regla de la absorción agravada del artículo 75 del Código Penal, en virtud de la cual se debe aplicar la pena más grave del delito más grave, en el caso concreto, su representado debió ser condenado a la pena única correspondiente al delito de homicidio frustrado de carabineros en ejercicio de sus funciones sobre la víctima Manuel Leonel Guzmán Hernández, mensurada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en 15 años de presidio mayor en su grado medio, en razón de todos los delitos provenientes del envío de la encomienda explosiva de la 54° comisaría de Huechuraba.



De acuerdo al tenor literal del artículo 17 B de la ley 17.798, las penas que correspondan en razón de los delitos castigados por este cuerpo normativo, se aplican de manera independiente de las que se impongan, a su vez, por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando los artefactos regulados en la ley de control de armas. Pero lo anterior en ningún momento implica, como razona erradamente el tribunal, que los delitos que se cometan empleando las armas u artefactos, deban acumularse materialmente entre sí de acuerdo al artículo 74 del Código Penal, impidiendo la regla de absorción agravada del concurso ideal establecido en el artículo 75 del Código Penal.

En conclusión, solicita que, de acogerse esta causal, se proceda a rectificar los errores de derecho, anulando la sentencia recurrida, y dictando otra de reemplazo en la que se condene a su representado a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, vía aplicación del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal, o la que se considere ajustada a derecho, por los siguientes delitos: 1. Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones en la persona del entonces Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández. 2. Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel. 3. Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena. 4. Cinco delitos consumados de lesiones leves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo del Carmen Chamorro Salas, y 5. Un delito consumado de daños calificados cometido en dependencias de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile.

**Causal sexta y séptima subsidiarias de la anterior en el escrito recursivo, interpuestas de manera conjunta, respecto del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por infracción en dos aspectos, del artículo 391 N°1 del Código Penal y del artículo 12 N° 1 del mismo texto.**

**Sexto:** Las referidas causales se sustentan en dos consideraciones, como se indica a continuación:

**Causal sexta, primera vertiente:** Errónea calificación jurídica de la circunstancia calificante del delito contemplado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, correspondiente a la alevosía:



En el considerando trigésimo sexto los sentenciadores dan por acreditado el delito de homicidio en grado de frustrado respecto de Rodrigo Hinzpeter con la concurrencia de la calificante de alevosía, por obrar a traición y sobre seguro.

**Causal séptima, segunda vertiente:** Errónea calificación jurídica referida a la circunstancia agravante del artículo 12 N°1 de alevosía respecto del delito de homicidio frustrado en la persona del entonces, comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández.

En el considerando centésimo décimo cuarto los sentenciadores dieron por acreditado la concurrencia de la agravante del artículo 12 N° 1 del Código Penal, de acuerdo a las consideraciones que allí se esgrimen.

La defensa entiende que respecto de ambas causales rige el principio non bis in ídem en razón de estar consideradas las circunstancias calificantes de la figura penal de homicidio calificado en el delito del envío de encomiendas explosivas, como a su vez la circunstancia agravante respecto del otro delito de envío de encomiendas explosivas.

El non bis in ídem, es una garantía que está reconocida en todos los ordenamientos penales democráticos, cuyo origen histórico es posterior al siglo II D.C, el cual tiene por objeto evitar que se juzgue o condene a una persona por los mismos hechos, cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento.

De acuerdo a la opinión del profesor Mañalich, no se trataría de un principio único, sino que “una conjunción de dos estándares susceptibles de ser estrictamente diferenciados en atención a sus respectivas condiciones operativas.” Un estándar sería de carácter material que prohibiría la doble punición por un mismo hecho, y otro sería de carácter procesal que prohibiría el juzgamiento múltiple por un mismo hecho.

Si bien en nuestra Constitución este principio no tiene un reconocimiento expreso, resulta indubitada su vigencia tanto para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como para la jurisprudencia de la Corte Suprema. En este sentido son los fallos Rol N° 3054, de fecha 7 de junio de 2018, por parte del Tribunal Constitucional, y Rol N° 88935, de fecha 3 de agosto de 2017, por parte de la Corte Suprema.

De igual manera, se ha encontrado fundamento legal al non bis in ídem en el artículo 14 N°7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 8 N°4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que ambos tratados se encuentran ratificados y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico de conformidad al artículo 5° inciso 2 de la Constitución. Además de lo



anterior, se ha deducido este principio del derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

La Corte Suprema en el fallo antes citado Rol N° 88935, señala: “El principio non bis in ídem es una garantía individual, cuyo sustento se halla en el debido proceso legal exigido por el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El referido principio busca evitar que una misma circunstancia o aspecto del hecho objeto de juzgamiento tengan relevancia bajo más de una descripción, y se contravenga así la prohibición de punición múltiple. Así, se busca evitar sancionar dos veces una misma conducta, razón por la que la doctrina está conteste en que para que este tenga aplicación es necesario que exista identidad entre el sujeto, el hecho y su fundamento”.

En el presente caso -según la defensa-, en ambas causales o variantes señaladas se ha infringido el principio referido en su expresión de prohibición de la doble valoración del hecho o regla de la inherencia, que busca evitar que un mismo aspecto del objeto de juzgamiento sea considerado más de una vez en el estándar de adjudicación, en la fundamentación de la sanción cuya eventual imposición se trata.

Lo relevante es que la alevosía, se encuentra incorporada y castigada a través del delito de envío de encomiendas explosivas, lo que es parte del fundamento de la alta pena de ese delito, castigado además de manera independiente en razón del artículo 17 B de la Ley de control de armas respecto del homicidio. Sin perjuicio de que el artículo 14 de la ley 17.798 no establece una modalidad específica respecto del envío de encomiendas explosivas, esta tampoco queda restringida. De acuerdo a un análisis exegético es posible concluir que cada uno de los aspectos de hecho referidos al envío de encomienda explosiva son inherentes a esta; de lo contrario caeríamos en el absurdo de sostener que el autor realice un actuar para ser descubierto no sólo en cuanto a su identidad sino también a la totalidad del plan criminal, debido a que es imposible ejecutarlos de una manera que no involucre un aspecto que no sea inherente al envío o evitar ser descubierto.

Sobre el particular, respecto de obrar a traición, se señala en primer lugar que el acusado utilizó un medio formal y de reconocimiento masivo de transporte de encomiendas, Correos de Chile, lo que sin duda corresponde a una de las numerosas empresas de transporte de encomiendas. Sea esta u otra empresa, atendida la proliferación de las mismas en estos tiempos, no hubiese modificado el envío.

En segundo lugar, refiere a que el mecanismo venía oculto en una caja de madera utilizada regularmente para regalar botellas de vino. En este sentido,



sostener que el mecanismo o el artefacto mismo sea enviado de manera expuesta, implicaría que dejaría de ser una encomienda, ya que, de acuerdo a su 11 acepción del Diccionario de la Real Academia Española esta palabra significa: “11. f. Am. Paquete que se envía por medio de un servicio de transporte.” Por ende, el envío sin la encomienda consistiría sólo en el envío de un artefacto.

En tercer lugar, se sostiene que la documentación consignaba en el envío la existencia de un galvano; sin duda quien realice este tipo de conductas ilícitas va a pretender ocultar su verdadera intención. ¿De qué manera podría llevar a cabo la totalidad del plan criminal?.

En cuanto al obrar sobre seguro, por el hecho de ocultar su cuerpo y su propia identidad se advierte, en primer lugar sobre este punto, que al dirigirse a la sucursal de Correo de Chile lo hizo con gorro con orejas y visera, además de chalequillo rojo con huinchas reflectantes, que en segundo lugar además de ocultar su cuerpo ocultó su identidad otorgando la de otra persona, delito por el cual es de recalcar fue absuelto; en tercer lugar al haber utilizado diversos vehículos para distraer el seguimiento investigativo, cuarto lugar que para lograr ocultar su intervención corpórea procedió a deshacerse de parte de la indumentaria; en quinto lugar que el encargo del envío de encomienda permitía que estallara cuando este se encontrara distante del punto de detonación y sexto, que debiendo de estar en conocimiento de las medidas de seguridad y control existentes para el ingreso al Edificio Itau procuró que el contenedor fuera plástico para evitar ser detectado.

Sobre estos puntos y sin perjuicio de que todos y cada uno de ellos corresponden a un plan delictual para evitar ser reconocido, ya que de lo contrario debería sostenerse el absurdo fuera de toda lógica que el autor quería ser descubierto y que su plan también lo fuese, la defensa alega que no deja de llamar la atención el punto sexto, toda vez que la única manera de poder sostener que debía estar en conocimiento de las medidas de seguridad del edificio Itau, fue mediante la declaración del acusado, declaración que fue desestimada, no configurándose la minorante de colaboración sustancial.

En consecuencia, en todos y cada uno de los puntos tenidos en cuenta por el tribunal, se trataría de un mismo aspecto del objeto de juzgamiento el cual se está considerando más de una vez en el estándar de adjudicación, lo cual evidentemente vulnera el principio non bis in ídem.

Todos los elementos señalados por el fallo resultan inherentes al envío de una encomienda explosiva que se castiga con una alta pena, ya que la elaboración de un paquete explosivo supone un plan criminal, la selección de un destinatario y el uso de un medio de transporte convencional, de lo contrario



estaríamos en el absurdo de que el tipo penal del envío de envío de encomienda explosiva sólo sanciona a quien de improviso elabora un paquete explosivo y lleva de manera personal a alguien al azar, para ser descubierto de inmediato, lo cual se aleja del sentido de la norma.

Respecto de la alevosía como circunstancia agravante del artículo 12 N° 1 del Código Penal en cuanto al homicidio en grado de frustrado del Sr. Guzmán, y sin pretender ser majadero, se utilizan los mismos argumentos referidos a la calificante.

En primer lugar, la utilización de un medio formal y reconocimiento masivo de transporte de encomiendas; en segundo lugar un mecanismo que se oculta en una caja de madera; en tercer lugar que se ocupe en la documentación que el contenido era un galvano. En cuanto al actuar sobre seguro de igual manera su utilizan los mismos argumentos referidos a la calificante de alevosía, menos el punto sexto referido a utilizar un contenedor plástico.

A mayor abundamiento, de acuerdo al artículo 63 del Código Penal, se espeta, aplicar esta agravante implicaría una infracción al principio non bis in ídem, ya que se incluyen en el castigo del tipo penal relacionado con el artículo 14 D de la Ley 17.798 por el cual se está acusando en el hecho 1 (envío de encomienda explosiva).

Como lo señalan los profesores Matus y Ramírez en el libro sobre circunstancias atenuantes y agravantes en el Código Penal Chileno, si los medios que se emplean son armas de fuego o explosivos bajo el control de la Ley 17.798, entonces el régimen punitivo es el artículo 17 B, por lo que tienen que excluirse las agravantes que se encuentran consideradas o son inherentes a ese delito del envío de encomienda, ya que de lo contrario se incurriría en una doble punición.

En esta línea, el principio non bis in ídem, busca evitar que un mismo aspecto del objeto de juzgamiento sea considerado más de una vez en la fundamentación de la sanción cuya eventual imposición se trata. Es decir, aquellos elementos que fueron considerados para efectos de la incriminación no pueden tomarse en cuenta para agravarla, lo cual entra en abierta contradicción en este caso con la agravante señalada y el tipo penal del artículo 14 D de la Ley de control de armas, que por disposición expresa del artículo 17 B de la Ley 17.798 se castiga de conformidad al artículo 74 del Código Penal, diferenciando en este sentido los delitos de la ley de control de armas y los cometidos mediante armas o elementos sujetos a dicha ley.

Pide, finalmente en esta parte, se anule el fallo y dicte, sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo que se conformare a la ley y en definitiva se recalifiquen los hechos acreditados en la sentencia y se



condene a su representado como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y b) como autor del delito de homicidio frustrado previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar; se condene a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al no concurrir la agravante del artículo 12 N° 1 del Código punitivo.

**Causal octava subsidiaria en el recurso, según la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, y vinculada al artículo 11 N° 9 del Código Penal.**

**Séptimo:** Que se arguye que la sentencia recurrida ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en particular en aquella parte que ha desestimado la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal en relación con la atenuante establecida en el Art. 11 N° 9 del Código Penal, esto es, “haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.”

La actuación aludida precedentemente no se ajustaría a derecho por las siguientes circunstancias:

**A.** Declaración Inculpatória: En sus dos declaraciones, el acusado, no elude su responsabilidad, sino que asume directamente su culpabilidad y participación en los hechos. En consecuencia, la declaración de su representado, no fue utilizada como un medio de defensa procesal, sino únicamente para colaborar a su esclarecimiento. Toda vez, que reconoce íntegramente su participación en los hechos, de tal forma que la defensa elaboró su teoría del caso en torno a esta declaración.

**B.** Renuncia del derecho a guardar silencio: El artículo 93 letra G del Código Procesal Penal establece el derecho de los imputados a guardar silencio. En consecuencia, al declarar durante el juicio oral, su representado se despoja de una garantía procesal, con la única finalidad de colaborar al esclarecimiento de los hechos.

**C.** Renuncia a la presunción de inocencia: El artículo 4 del Código Procesal Penal prescribe: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. En consecuencia, al declarar en el juicio oral, el imputado abandona voluntariamente su estado de inocencia procesal, que es una garantía, con la única finalidad de servir a los fines del proceso permitiendo el esclarecimiento de los hechos.



**D.** Sustancialidad de la colaboración: Esto significa, en palabras de la Excelentísima Corte Suprema, “la colaboración debe ser sustancial, vale decir, no ha de limitarse a proporcionar detalles intrascendentes, sino constituir un aporte efectivo y serio al éxito de las averiguaciones, aunque no es preciso que se traduzca verdaderamente en resultados concretos.” (Corte Suprema, 13 Enero 2006, ROL 5741-2005). En concepto de la defensa, la declaración de su representado, constituye un aporte sustantivo al esclarecimiento de los hechos, pues es en base a esta declaración, que se elaboró la teoría del caso de la defensa, esto es la “determinación de la pena más idónea”, sin plantear una teoría alternativa a la acusación. Es más, el hecho de que su declaración sea coincidente con la prueba de cargo, no obsta la aplicación de esta circunstancia atenuante, pues tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, en la causa ROL 5741-2005, no es necesario que la colaboración se traduzca en resultados concretos. Por lo tanto, aun cuando con el resto de la prueba se haya podido determinar la participación, es innegable que con su declaración contribuyó a que el tribunal pudiera establecer más allá de toda duda razonable la participación del imputado en los hechos y acreditación de los delitos.

En este sentido, la Ilustrísima Corte de San Miguel, ha señalado en la causa Rol N° 2144-2015 que procede la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, toda vez que “el imputado objetivamente colaboró a dicho esclarecimiento, al renunciar a su derecho a guardar silencio, prestar declaración y situarse en el lugar de ocurrencia del ilícito, lo que sin duda ayudó a una más pronta resolución de la investigación.”

De esta manera, el Profesor Juan Pablo Mañalich, expresa como fundamento, refiriéndose a las atenuantes contempladas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 11: el “comportamiento supererogatorio del imputado”, refiriéndose con aquello a “cuando el mismo (el comportamiento) consiste en una prestación que excede lo que, en la respectiva situación, es posible exigir del agente”.

Para sintetizar esta idea, agrega la siguiente reflexión: “el comportamiento posterior al hecho punible por parte del imputado puede llegar a exhibir fuerza atenuante cuando ese comportamiento es expresivo de un ejercicio supererogatorio de fidelidad a derecho por parte de quien resulta responsable de un quebrantamiento del derecho, en términos tales que la correspondiente reacción punitiva en cuestión puede serse modulada, de modo favorable al imputado, en atención a esa muestra -tardía- de fidelidad a derecho”.

Así, resulta claro que, en el caso concreto de la atenuante del artículo 11 N° 9, sobre el imputado, no pesa deber jurídico alguno, más aun considerando el



Sistema Procesal Penal Chileno, de “colaborar” (ni siquiera mínimamente) en el esclarecimiento en el esclarecimiento de los hechos.

El acusado declaró en la investigación, meses antes del cierre de esta. Declaró además en estrado, permitiendo conocer su postura en relación a los hechos. En ningún caso puede ser considerada exculpatoria respecto de la coimputada, ya que, de ser así, no hubiese declarado en la dos oportunidades. Se aportaron mayores antecedentes, incluso en relación con el caso de España. A su vez, se aportó la forma exacta de la fabricación de los artefactos explosivos, lo cual logró superar la falta de información, que si bien el fallo sostiene que es intrascendente, lo cierto es que tres de los artefactos detonaron y al ser considerada la calificante de alevosía respecto del homicidio calificado, la única manera de dar por cierto el hecho de que en la fabricación utilizó un contenedor de plástico para evitar ser descubierto por cuanto debía conocer las medidas de seguridad del edificio Itau, es mediante su declaración que dio cuenta de haber concurrido y observado dicho lugar con anterioridad al envío. Como señaló el oficial investigador, Sr. Nicolás Aliaga, el encartado se refirió en dónde y a través de quien adquirió la dinamita utilizada en el Hecho 1, lo cual derivó en diligencias que confirmaron la existencia de un sujeto con el apodo otorgado, que trabajó en minería y que figuraba en el registro de detenidos.

Respecto a la colaboración realizada por la coimputada resulta indesmentible que el rol que le cupo en la caracterización de su representado en el maquillaje, elaboración del vientre falso, lo que sólo se pudo saber con su declaración, además, fue el propio Ministerio Público quien reconoció en sus alegaciones que sin el aporte de Mónica Caballero en la caracterización de Francisco Solar no hay colocación del artefacto. De igual manera, es el Sr. Solar quien sitúa e indica lo que realizó la coimputada en el hecho 2, tanto por cuanto en la explanada del Parque Bicentenario la distancia de las cámaras impide un efectivo reconocimiento, como inclusive por los recorridos realizados desde que se separan, cerca del Servicentro Copec, hasta que realiza las llamadas antes de las detonaciones en el Parque Bicentenario. Sobre este recorrido hacia el Parque Bicentenario es trascendental, a diferencia de lo que sostiene el fallo recurrido, lo declarado por el testigo Luis Santiago Soto Pérez, en cuanto a no existir una contradicción, sino más bien una corrección por cuanto no hay imágenes de la coimputada cuando toma el taxi para dirigirse al Parque Bicentenario. Siendo este problema probatorio del recorrido de la coimputada aclarado solamente por la declaración de su representado.

Otro elemento esclarecedor de la declaración de Francisco Solar, que coincide con la prueba rendida en el juicio, no así de las insinuaciones y



alegaciones del Ministerio Público, es el hecho de que quien transportó y manipuló de manera exclusiva los artefactos explosivos fue él. Resulta relevante señalar, que el propio oficial investigador del caso el Sr. Nicolás Aliaga, reconoció en estrado que Francisco Solar aportó varios antecedentes nuevos con su declaración, en ese sentido, se pudieron aclarar por completo las rutas que se utilizaron en ambos atentados, en especial las idas y regresos a la parcela de San Rafael en el Hecho 1, como la llegada a Beauchef y Parque Bicentenario en el Hecho 2. Exigir un estándar de cooperación eficaz de conformidad al artículo 17 C de la Ley de Control de armas, resulta inadecuado jurídicamente. Entonces, el aporte que realizó Francisco Solar sobre la participación de Mónica Caballero en su caracterización y en la confección del vientre falso es evidente.

Solicita, en consecuencia, se anule la sentencia recurrida, dictándose sentencia de reemplazo que condene a Solar Domínguez en virtud del artículo 385 del citado Código, concurriendo en la especie la circunstancia atenuante de colaboración substancial y ninguna agravante, imponiendo al imputado la penas en su rangos mínimos respecto de los delitos de la ley 17.798, como también respecto de todos los delitos cometidos con ocasiones o empleo de armas contemplados en la ley referida o lo que se estime en derecho.

**III. Análisis de las hipótesis subsistentes por desistimiento del abogado recurrente en estrado, en lo relacionado a las causales primera y novena de su libelo:**

**Octavo:** Que, inicialmente, debe consignarse que en conformidad al mecanismo de abrogación utilizado, de carácter estricto y específico según el sistema procesal penal vigente, lo que corresponde a esta Corte es revisar por medio del recurso de nulidad exclusivamente las causales de nulidad del juicio y/o la sentencia promovidas por la defensa del condenado y subsistentes en atención a su desistimiento parcial, habida cuenta del carácter subsidiario planteado, sin que sea procedente extenderse a otros tópicos, salvo en cuanto el marco facultativo limitado que permiten aquellas causales utilizadas, y en tanto el eventual uso de las facultades excepcionales oficiosas en esta clase de revisión acotada.

Se analizarán entonces las causales según el orden propuesto en el escrito de impugnación formulado por la defensa, excluyendo las causales signadas como primera y novena.

**Segunda causal en el libelo recursivo del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal:**

**Noveno:** Que reproducido el reproche en el motivo segundo precedente, en síntesis, se dice, que se ha infringido la sana crítica, concretamente el principio de



lógica sobre razón suficiente, por cuanto no se probó la operatividad de la pólvora que se encontraba inserta en el cambucho de cartón de la encomienda explosiva enviada a la víctima Rodrigo Hinzpeter en el hecho 1, lo que habría impedido saber si pudo comenzar “el tren iniciador” del artefacto, lo que redundaría en la absolución del acusado Solar o recalificar la figura delictiva. La valoración ineficiente de la prueba, “por no hacerlo, o carecer de argumentación” estaría referida a la declaración de los peritos José Ferrada Macaya y Gabriela Veldebenito Zenteno, en relación al mérito de la prueba relacionada y especialmente a los informes periciales de Francisco Gajardo Muñoz, Ricardo Labra, Arnaldo Carrasco y Mario Espinoza Muñoz, fundamental para justificar la posibilidad de detonación de la encomienda y su naturaleza explosiva.

**Décimo:** El vicio denunciado es aquel de la letra e) del artículo 374 del Código de Procesal Penal, que consiste en que “El juicio oral y la sentencia, o parte de éstos, serán siempre anulados”: (...) letra e) cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e) del mismo texto. Esto es: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; d) Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo; y e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

**Undécimo:** La sentencia atacada en su considerando décimo séptimo se hace cargo extensamente de la prueba que colaciona y referida a la capacidad explosiva de la encomienda enviada a Rodrigo Hinzpeter Kirberg, aludiendo también circunstanciadamente a las declaraciones de Luis Gonzalo Jara Araneda, y del experto Arnaldo Leonel Carrasco Durán, concluyendo este que dicha encomienda reunía las mismas características de otro artefacto detonado el mismo día en la 54° Comisaría de Huechuraba, que contaba con la misma remitente: Sandra Mutis Tapia. Finalmente, sostuvo que se realizó fijación fotográfica de todos los componentes del artefacto, una vez desactivado. Al momento de serles exhibidas las fotografías Nos. 4 a la 23 de los otros medios de prueba N° 42 (OM y EM 44) reconoció el lugar de hallazgo, artefacto, piezas y partes de éste que él se encargó de desactivar.



También se evidenció la declaración del experto Patricio Javier Vega Vera quien refirió que el día 25 de julio de 2019 el equipo pericial a su cargo, constituido por el planimetrista forense Eliecer Isla y el perito fotógrafo Cristian Huenchumán Catril, se constituyó por procedimiento policial tipificado como hallazgo de artefacto explosivo no detonado acaecido en el Edificio Itaú, ubicado en calle Enrique Foster Sur N° 20 de la comuna de Las Condes, desde donde se levantaron, en lo pertinente, las evidencias correspondientes.

Igualmente, se consideró el informe experto de la perito Gabriela Andrea Valdebenito Zenteno quien, en síntesis, informó haberse hecho cargo de efectuar pruebas de su especialidad para determinar la presencia de sustancias de naturaleza explosiva, concluyendo que la evidencia rotulada como E-3.2, NUE 4836566, consistente en muestra de material particulado de color gris; sistema de ampollita fracturada con cables conductores eléctricos; trozo de cartón y una cinta adhesiva, arrojó en cuanto al material particulado, presencia de pólvora negra; la rotulada como E-4, NUE 4836566, consistente en un tubo de PVC con tapa en ambos extremos y material particulado color blanco en su interior, arrojó en cuanto al interior del tubo, presencia de nitroglicerina; la rotulada como E- 3.1, NUE 4989493 consistente en un trozo de mecha industrial de 5 centímetros, aproximadamente, con material particulado en interior, arrojó en cuanto al material particulado, presencia de pólvora negra y la rotulada como E-4.1.1, NUE 4988491 consistente en muestra de material particulado color blanco, arrojó presencia de dinamita. Exhibido a la experta el otro medio de prueba N° 51 (OM y EM 53) expuso que en las imágenes 2 a 7, se consigna el trabajo aplicado de acuerdo al procedimiento que explicó latamente en audiencia y que fue el medio para llegar a las conclusiones antes referidas. En medio de la deposición de la perito, se incorporó la prueba documental N° 11 (D 13) sosteniendo que corresponde a la NUE 4988491 relativa al material particulado rotulado como E- 4.1.1, que arrojó ser dinamita. A la exposición del otro medio de prueba N° 31 (OM y EM 32) respondió que corresponde a la NUE 4836566, cadena de custodia relativa a las evidencias rotuladas como E-3.2, que resultó ser pólvora negra y E-4 que resultó ser nitroglicerina. Por último, ante la presentación del otro medio de prueba N° 44 (OM y EM 46) sostuvo que corresponde a la NUE 4988493, consistente en material particulado en trozo de mecha industrial, de 5 centímetros aproximadamente de largo, rotulada como E-3.1.1, que resultó ser pólvora negra.

Se ponderó el informe experto del perito José Alfredo Ferrada Macaya, quien sostuvo que como miembro de equipo anti bomba del GOPE y con motivo de los hechos acaecidos con fecha 25 de julio de 2019 intervino en el levantamiento de dos sustancias y realizó dos pericias. La primera



correspondiente a la evidencia rotulada como E-3.2, NUE 4836566, la que por medio del uso de papel filtro colector, levantó una traza, que se encontraba en una especie de cono de cartón, y al ingresarla al detector de sustancias explosivas (MMTD detector de modalidades múltiples), arrojó la presencia de pólvora negra. La segunda correspondiente a la evidencia rotulada como E-4.1, NUE 4836567, levantó trazas de esta sustancia, consistente en 105 gramos que se encontraba al interior de un tubo de PVC, traza que al ingresarla al mismo detector, arrojó la presencia del componente explosivo nitroglicerina, que dijo ser la base de la dinamita, sustancias y proceder experto que el perito reconoció al momento de serle exhibidas las fotografías signadas con los Nos. 24, 25, 26, 27 y 28 de los otros medios de prueba 42 (OM y EM 44).

A su vez, ante la presencia del Tribunal depuso el experto Felipe Arturo Urrutia Rius quien, en lo pertinente, sostuvo que le correspondió realizar pruebas de detonación comparativa de explosivos en artefactos de fabricación artesanal utilizando detonadores mecánicos N° 8 en tubos plásticos cerrados, con y sin dinamita en su interior, en base al detonador mecánico correspondiente a la evidencia rotulada como E-3.1 levantada en el Edificio Itaú bajo el NUE 4988489. Además, se contó con la comparecencia del perito Francisco Javier Gajardo Muñoz quien señaló que el día 07 de enero de 2020 le correspondió efectuar pericia para determinar la operatividad de elementos explosivos de fabricación industrial, consistentes en una mecha lenta de fabricación industrial y un detonador mecánico N° 8 (evidencia E-3.1, NUE 4988489) que fueron recogidos del artefacto explosivo de fabricación artesanal desactivado levantado en el Edificio Itaú de Enrique Foster Sur N° 20 de la comuna de Las Condes.

Complementando las pruebas anteriores, se contó con el informe experto evacuado en audiencia por el perito Ricardo Antonio Labra Badilla, quien refirió que le correspondió efectuar pericias para los efectos de determinar si una batería marca Duracell de 9 voltios puede encender una ampolla de 12 de voltios y de 3 watts, para lo que se utilizó una batería y una ampolla de características similares a las encontradas en el artefacto explosivo artesanal desactivado en el Edificio Itaú con fecha 25 de julio de 2019. Después de explicar el procedimiento aplicado, concluyó que la batería mantiene carga para energizar un circuito eléctrico y que es capaz de prender la ampolla, proceder experto que reconoció y explicó al momento de serle exhibidas las fotografías del otro medio de prueba N° 313 (OM y EM 344) (...) Que la batería se encontraba con carga completa, suficiente y operativa para energizar un circuito eléctrico y todos los componentes consistentes los cables, perro de ropa, kit de conexión de la batería, interruptor y porta lámpara se encontraban aptos para flujo de energía eléctrica, toda vez que



presentaban continuidad, sin problemas de funcionamiento, todo lo que el experto reconoció y explicó al momento de exhibírsele el otro medio de prueba N° 226 (OM y EM 254). Además de lo anterior, este mismo experto sostuvo que le correspondió realizar informe pericial y respectiva maqueta del artefacto explosivo de fabricación artesanal desactivado con fecha 25 de julio de 2019 en el piso 16 del Edificio Itaú, efectuando las precisiones que se consignan. En cuanto al funcionamiento, señaló que al retirar el cartón la caja de vino queda expuesta y una vez que se realiza la apertura de la tapa de la caja se retira un trozo cuadrado de cartón que interfiere en el perro de ropa, permitiendo el tránsito de la corriente que proviene de la batería de 9 voltios en dirección a la ampollita que se encuentra con filamentos expuestos por su cristal roto, produciéndose su incandescencia y encendiendo la mecha, produciendo un tren de fuego calórico, que recorre la mecha y el detonador mecánico que se encontraba en contacto directo con la sustancia explosiva que se encontraba al interior del tubo de PVC, precisando que la maqueta se activa por su parte inferior y que tanto el detonador como la mecha utilizada en la maqueta son de naturaleza “inerte”, todo lo que el experto reconoció y explicó al momento de serle exhibidos los otros medios de prueba Nos. 193 (OM y EM 219) y 194 (OM y EM 220).

Por último, se dice que el trabajo efectuado por el experto Labra Badilla generó la confección de material infográfico y fotográfico por parte del perito José Domingo Cáceres Godoy quien, en resumen, expuso que le correspondió confeccionar material infográfico para ilustrar el funcionamiento de un artefacto explosivo reconstruido en una maqueta.

Y el tribunal consecuencialmente asevera que, en síntesis, de acuerdo a la prueba rendida en audiencia quedó suficientemente acreditado que el día de ocurrencia de los hechos, 25 de julio de 2019, en el Edificio Itaú ubicado en calle Enrique Foster Sur N° 20 de la comuna de Las Condes, se constituyeron equipos especializados de Carabineros de Chile, lugar en donde se fijó y levantó evidencia que permitió establecer que lo enviado a Rodrigo Hinzpeter Kirberg estaba constituido por un artefacto explosivo de fabricación artesanal que contaba con un sistema de activación eléctrica instalada para producirse su denotación al momento de la apertura de la caja con apariencia inofensiva, utilizando dinamita (sujeta al control de la Ley 17.798, de acuerdo a la prueba documental N° 97 (D 122)) como sustancia explosiva contenida dentro de un tubo plástico, tipo PVC, con sus respectivas tapas, al punto de que por todo el trabajo realizado por los departamentos especializados de Carabineros de Chile, logró determinarse la conformación, estructura, funcionamiento y activación de la indeseada encomienda, llegando a construirse una maqueta representativa del modelo



original, la cual, sin duda alguna, corresponde a un artefacto explosivo de fabricación artesanal que fue desactivado.

En el basamento décimo noveno, en tanto, los jueces se hacen cargo también de las objeciones de la defensa, desestimándolas de la siguiente manera: *“Que, ahora, sin perjuicio de que no tuvo lugar su detonación, quedó irrefutablemente acreditado que el artefacto contaba con plena aptitud y condiciones para explotar, puesto que, como quedó consignado previamente, diversos expertos sometieron a prueba todos y cada uno de sus componentes y llegaron a una misma conclusión, esto es, que todas y cada una de las partes integrantes del mecanismo explosivo se encontraban operativas y en estado de utilizarse de acuerdo a su naturaleza y según el propósito perseguido por el agente. Es más, consideran estos Magistrados que entre el artefacto enviado a Guzmán Hernández y el dirigido a Hinzpeter Kirberg, en cuanto a elementos que los componen se refiere, lo que los diferencia es, solamente, que en el primer caso el contenedor de la sustancia explosiva era metálico en tanto que en el segundo era de plástico, pero en ambos casos el mecanismo de funcionamiento era prácticamente idéntico, dispositivo comprobadamente apto, no sólo por lo referido por los expertos en audiencia al dar cuenta de la operatividad de éstos, sino porque, efectivamente, al abrirse el contenedor en uno de los casos en estudio, se dio inicio a la activación del artefacto explosivo y, consecuentemente, detonó, tal como lo planeó y diseñó su autor. Por último, en ambos casos se constituían en base a material explosivo, sin embargo para el segundo caso correspondía a un alto explosivo (según lo manifestaron los expertos que comparecieron en la presente audiencia), es decir, una sustancia con mayor rapidez y poder explosivo, cual es la dinamita”*

**Décimo segundo:** Que, según el marco de la causal adjetiva planteada, hemos dicho que en la construcción de una sentencia es posible encontrar tres etapas perfectamente diferenciadas, que no deben confundirse: Una: el desarrollo de la tesis descriptiva y argumentativa del fallo donde se contienen las exigencias de las letras a) a la d) del artículo 342 del Código Procesal Penal, más los incisos 2° y 3° del artículo 297 del referido Código. Dos: el proceso de valoración en sí mismo y propuesto por medio de la argumentación ya referida, que se obtiene a partir de la contrastación de la prueba aportada al juicio con libertad, pero sin “contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados” para arribar a las definiciones fácticas que efectúa el sentenciador (inciso 1° del artículo 297 del texto procesal citado). Y Tres: La definición en lo resolutivo de las cuestiones fundamentales del juicio, en términos de absolución o condena, según la letra e) del enunciado artículo 342.



**Décimo tercero:** Que si bien en el libelo recursivo se mezclan reproches en torno a la argumentación o ausencias de razonamientos, como del empleo del principio de lógica de la razón suficiente, lo cierto es que el fallo, en lo cuestionado, si describe las razones que justifican las conclusiones que alcanza en torno a la prueba que describen circunstanciada y minuciosamente, a saber testimonial, documental, evidencia material, fotografías, junto con otras, y su ponderación. Del mismo modo, se hacen cargo de la tesis acusatoria y de la teoría exculpatória de la defensa, especialmente en lo relativo a la encomienda enviada a Rodrigo Hinzpeter y sus condiciones de funcionamiento y operatividad, todo ello de modo íntegro, claro y formalmente lógico, corroborando la tesis del órgano persecutor y de los querellantes.

**Décimo Cuarto:** Que la afectación de la sana crítica por vulneración al principio de razón suficiente, -lo hemos dicho en otras sentencias ya tantas veces- se trata de un ejercicio racional que consiste en la definición acerca del conocimiento de la verdad de las proposiciones exigiendo que la prueba sólo pueda dar fundamento a ciertas conclusiones y no a otras.

Es así que debe acudir, en primer orden, a un grado de confirmación, en términos que cada hipótesis planteada debe ser confirmada por una prueba, o *“La hipótesis acusatoria debe ser ante todo confirmada por una pluralidad de pruebas o datos probatorios, pues debe ser formulada de modo tal que explique la verdad de varios datos probatorios y la explicación de todos los datos disponibles.”*

En esta misma dirección y entrando a un análisis más exhaustivo es necesario *“un nexo lógico entre ambas, que hace que la existencia de esa última constituya una razón para aceptar la primera. La confirmación es una inferencia mediante la cual a partir de unas pruebas y de una regla que conecta esas pruebas con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última”*. Esto es, debe advenir un sistema coherente de datos, con arreglo a los cuáles todos los hechos conocidos y otros hechos adicionales han de ser deducibles de la hipótesis probada y todos los hechos probados deben cuadrar con la hipótesis descubierta.

En un segundo orden, ha de producirse lo que denomina la garantía del contradictorio para permitir la refutación de la o las hipótesis. Y entonces ha de sortearse lo que se entiende como el *“requisito de la no refutación”*, en que la hipótesis luego de confirmada, y en esa etapa de discusión, no debe ser desmentida por las pruebas disponibles, produciéndose allí entonces su verificación.

La tercera exigencia para aceptar como verdadera la hipótesis, es la *“imparcialidad de la elección realizada por el Juez entre las hipótesis explicativas en competencia”*, lo que significa que el resultado obtenido debe prevalecer de las



teorías o tesis explicativas en conflicto, según su grado de probabilidad de existencia.

(Marina Gascón (*Los Hechos en el Derecho: Bases Argumentales de la Prueba*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, páginas 178 y siguientes. Marcela Araya Novoa “Recurso de Nulidad Penal y Control Racional de la Prueba”. Ediciones Librotecnia, Santiago de Chile, primera edición de marzo de 2018, en sus páginas 176 y siguientes, y Luigi Ferrajoli “*Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal*”, traducción de Perfecto Ibáñez y otros, Editorial Trotta, Madrid, 1997, páginas 150 y siguientes).

**Décimo quinto:** Que, de allí, el tribunal pondera la probanza y concluye con cierta tesis que confirma con la prueba allegada al efecto, la contrasta, infiere coherentemente, refuta atingentemente las hipótesis alternativas, todo lo que se divide efectuarse de manera independiente e imparcial. La resolución objetada atiende a aquel fenómeno que permite asumir que es consistente en su fundamentación y los argumentos que se vierten, así como comprende adecuadamente la correlación de la prueba con los hechos atribuidos, estando perfectamente congruentes la explicación y el resultado, sin posibilitar obtener otras conclusiones.

**Décimo Sexto:** Que, en tal escenario, no se produce la hipótesis denunciada por medio de la causal adjetiva propuesta, direccionada a la ausencia de fundamentación y al principio lógico de razón suficiente y, consecuentemente, será desestimada.

**Tercera causal subsidiaria en el recurso, según la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, referida a la aplicación errónea del artículo 351 del Código Procesal Penal por imponer penas separadas a consecuencia de cuatro ilícitos de la ley 17.798 sobre Control de Armas. Y, conjuntamente, en un segundo reproche, en relación a los ilícitos referidos a la vida y salud de las personas, esto es homicidios, lesiones graves y menos graves.**

**Décimo Séptimo:** Que, en un primer aspecto, ya se dijo, se precisa por la defensa que la pena por el delito de envío de encomienda explosiva, previsto y sancionado en el artículo 14 D, inciso 1°, parte final, de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en abstracto es la misma que la corresponde a la del delito de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, previsto y sancionado en el inciso 1° del artículo 14 D de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, fijada en presidio mayor en su grado medio. Por lo que en rigor correspondía imponer una única pena por exasperación en los términos de lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, aumentado la sanción basal solo en un grado.



**Décimo octavo:** Que también, en un segundo aspecto conjunto, se vincula la causal en comento a la transgresión del artículo 351 del Código Procesal Penal, pues la defensa solicitó la aplicación de esta norma respecto de los siguientes delitos por los cuales fue condenado en calidad de autor: 1- Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, con la agravante de alevosía de artículo 12 N° 1 del Código Penal, en la persona del entonces comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández, cometido con fecha 25 de julio de 2019. 2- Un delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg perpetrado con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Las Condes. 3- Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba. 4- Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba.

El fundamento jurídico de la acumulación solicitada vía artículo 351 del Código Procesal Penal, es que todos los delitos antes nombrados tienen el mismo bien jurídico base, el cual corresponde a la vida y salud de las personas, y la fórmula de imposición de penas acumuladas, resultaba más favorable para el sentenciado.

**Décimo noveno:** Que el artículo 351 del Código Procesal Penal señala: *“Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados. Si, por la naturaleza de las diversas infracciones, éstas no pudieren estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de los delitos. Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor. Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico”.*

A su vez, la norma del artículo 74 del Código Penal indica: *“Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá todas sus condenas*



*simultáneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, o si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas, las sufrirá en orden sucesivo, principiando por las más graves o sea las más altas en la escala respectiva, excepto las de confinamiento, extrañamiento, relegación y destierro, las cuales se ejecutarán después de haber cumplido cualquiera otra pena de las comprendidas en la escala gradual núm. 1.”*

**Vigésimo:** Que en el contexto referido sobre la imposición de las penas corporales ya explicitadas, ello supone analizar el ejercicio que efectuaron los juzgadores de grado, para llegar al quantum de que se trata.

El tribunal en el motivo centésimo décimo quinto, con relación a los cuatro delitos previstos y sancionados en el artículo 14 letra D, inciso 1° de la Ley 17.798, castigados, cada uno de dichos ilícitos, con la pena de presidio mayor en su grado medio, expresa que: *“no se hará aplicación de lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, puesto que de aplicar dicha regla y teniendo en consideración el grado de participación del inculcado; el número de ilícitos y el aumento de dos grados que se considera adecuado al caso, se podría llegar a tener que imponer la pena de presidio perpetuo, considerándose que es más beneficiosa la imposición de una pena determinada y limitada en cantidad de años de forma concreta. De esta manera, no obstante tratarse de delitos reiterados de la misma especie y por serle más favorable a Solar Domínguez se hará aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, **situación en la que no concurren circunstancias que alteren el compromiso criminal del sentenciado** pudiendo recorrer las penas, correspondientes a las diversas infracciones, en toda su extensión, optándose por los quantum que se expondrán en la parte resolutive de la sentencia por aparecer más acorde a la naturaleza y modalidad de los hechos. Para lo anterior, se ha tenido en consideración, especialmente, los efectos que ello provocó en las personas en cuanto a que, como se expuso en audiencia, se inhibieron de seguir adquiriendo productos con la modalidad de entregas a domicilio para evitar exponerse a recibir encomiendas o entregas que eventualmente pudieran revestir riesgo análogo a las encomiendas dirigidas a Guzmán Hernández y Hinzpeter Kirberg. Por lo demás, las encomiendas enviadas por el sentenciado y cuyas entregas fueron gestionadas por la empresa Correos de Chile, atendida la naturaleza de dichos envíos, obligó a la empresa en cuestión a ampliar sus medidas de seguridad, toda vez que después de conocidos estos hechos Correos de Chile se vio en la necesidad de implementar mecanismos para la detección de envíos similares dentro del territorio nacional, medida que antes existía sólo para las encomiendas internacionales, tal y como lo postuló la testigo*



*Marlenne Pilar Salas Salas quien se desempeña como operadora postal en la sucursal CEP (centro de encomiendas postales) de Correos de Chile”.*

Que antes, el mismo fallo en el considerando centésimo décimo tercero, ya había anticipado respecto de lo impetrado por la defensa de Solar, que si bien la defensa había requerido se consideren constitutivos de un solo delito, dicha petición fue desestimada: *“por el hecho de que si bien es cierto que el remitente es sólo un sujeto que se presentó a la sucursal El Bosque de la empresa Correos de Chile, en realidad, que cada uno de dichos envíos constituyen dos encomiendas diversas, toda vez que cada una de ellas cuenta con una conformación separada e independiente la una de la otra; cada una de ellas contaba con un mecanismo, estructura y funcionamiento autónomo; cada una de dichas encomiendas tenían como destinatarios a dos personas completamente diferentes entre sí, debido a que cada una de ellas cuenta con identidad, ocupación y domicilio propios, diversos y autónomos; que para el traslado y gestión de cada uno de dichos envíos tuvo que intervenir diverso personal de Correos de Chile para los efectos de cumplir con el encargo de hacer la entrega de cada uno de dichos paquetes en comunas diversas como lo fueron la de Huechuraba y la de Las Condes y todo ello unido a los discurrecimientos que se han plasmado respecto de la figura en actual estudio, de acuerdo al parecer de estos sentenciadores, se reúnen los requisitos necesarios para acoger la pretensión del persecutor en cuanto a considerar que cada uno de dichos envíos se alzan, configuran y constituyen un delito independiente y, consecuentemente, cada uno de dichos envíos amerita, en principio, una sanción separada e individual, sin perjuicio de lo que se expondrá y determinará en la parte pertinente de la presente sentencia al momento de proceder a la fijación de las sanciones”.*

**Vigésimo primero:** Que, a su vez, tratando el segundo aspecto de la causal, en el mismo basamento centésimo décimo quinto, los juzgadores cuando se refieren a los delitos que cautela la vida y salud de las personas, esto es de homicidio frustrado (dos), y los delitos de lesiones graves, menos graves, y cinco delitos de lesiones leves a carabineros que se encuentran en ejercicio de sus funciones, razonan que para el caso de aquellos ilícitos referidos al Código de Justicia Militar, que *“por considerarse más beneficioso para el sentenciado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, imponiéndole las penas correspondientes a las diversas infracciones, fijándose el quantum preciso, en cada caso, que se plasmará en la parte resolutive de este fallo, por aparecer más condignos y ponderados en relación a los hechos”.*

**Vigésimo segundo:** Que, en una primera aproximación, esta Corte encuentra atendible el mecanismo que utilizaron los jueces para imponer las



penas de que en este capítulo se trata, utilizando el sistema de punición del artículo 74 del Código Penal, en vez del artículo 351 del Código Procesal.

Ello, habida cuenta que ha debido emplearse la regla del artículo 17 B de la Ley 17.798 que señala: *"Artículo 17 B.- Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. Para determinar la pena en los delitos previstos en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y 14 D, y en todos los casos en que se cometa un delito o cuasidelito empleando alguna de las armas o elementos mencionados en el inciso anterior, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51 a 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley N°20.084 y en las demás disposiciones de esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar dicha pena."*

Luego, debe ser considerada primero la configuración típica de los ilícitos, ponderándose las modificatorias existentes y, enseguida, aplicar las reglas del artículo 17 B de la Ley 17.798 (y/o del Código Penal), respectivamente, de tal modo que recién correspondía aumentar aquella pena base en uno, dos o tres grados, como posibilita el artículo 351 aludido.

Así las cosas, considerando cada caso sin modificatorias de responsabilidad, y pudiendo recorrer la pena legal en toda su extensión, el tribunal oral bien pudo hacer el ejercicio hipotético de tomar como base el grado de que se trate o la zona superior, para aumentar recién de allí dos grados, como lo puntualizó, obteniendo en el caso de los cuatro delitos del artículo 14 letra D de la Ley 17.798 efectivamente una pena única de presidio perpetuo. Y, en el caso de los delitos contra la vida y salud, de homicidio frustrado calificado por alevosía y homicidio frustrado de carabinero en ejercicio de funciones con la agravación del artículo 12 N° 1 del Código Penal, era pertinente distinguirlos entre sí, tratando diferenciadamente también todos los delitos a que se refiere el Código de Justicia Militar de homicidio frustrado (dos), lesiones graves, menos graves y leves a carabineros que se encuentran en ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta, asimismo, que hay delitos que afectan y tienen como bien jurídico tutelado la función policial principalmente, en conjunto con la vida y la integridad física o



psíquica, donde va comprendida, además, la afectación del orden público y la seguridad pública, tal como se acreditó durante la audiencia de juicio, se dice en el motivo centésimo décimo tercero.

Por lo tanto, resultaba más condigno a la naturaleza de las infracciones según la descripción legal, y al propio sentenciado, imponer las penas separadas e individualizadas para cada ilícito, como se hizo en el fallo, sin objeción.

Entonces, por esta vía se llega a las mismas sanciones que impusieron los jueces y, de allí, no se divisa la influencia que pudo tener el eventual error en la determinación de las penas ahora objetadas.

A su vez y a mayor abundamiento, el sistema de fijación de penas separadas que contempla el artículo 74 del Código Penal, es discrecional para el juez, teniendo en cuenta la regla contenida en el artículo 351 del Código Procesal Penal, correspondiendo recorrer en toda su extensión la pena asignada al delito, y bien pudo facultativa y teóricamente aumentarse en dos grados las sanciones de la Ley 17.798, para contrastarla con penas individuales, y así obtener lo más condigno a la situación que se le planteó, habida cuenta también de la diferente punición ínsita para los ilícitos del Código de Justicia Militar.

**Vigésimo Tercero:** Que, enseguida, el ya tantas veces citado artículo 351 del texto procesal penal no considera los efectos administrativos de la imposición de penas, o la posible utilización de los beneficios de la Ley N° 18.216, pues la disposición siempre alude al vocablo “pena”, tanto en el inciso primero, como en su inciso segundo.

En tanto para la opción del inciso tercero de la misma norma del artículo 351 supone visualizar el resultado más favorable a que se arriba por aplicación del artículo 74 del Código Penal, dado que el legislador dispone: *“Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor”*.

**Vigésimo Cuarto:** Que en este orden de ideas no han resultado transgredidas aquellas normas del artículo 351 del ordenamiento procesal penal, o artículo 74 del Código Penal, según se ha dicho. Y no adviniendo toda la situación denunciada en este capítulo del recurso, la vía esgrimida resulta ser inadecuada, lo que determinará se desestime la pretensión abrogatoria.

**Causal cuarta subsidiaria en el escrito recursivo, por errónea aplicación del artículo 17 B de la Ley 17.798, en relación al concurso ideal del artículo 75 del Código Penal, en la determinación de las penas que se indica.**

**Vigésimo Quinto:** Que la defensa en este acápite planteó, como ya se anunció, la presencia del concurso ideal del artículo 75 del Código Penal, en lo



concerniente a los delitos relativos a los funcionarios de carabineros de la 54° Comisaría de Huechuraba, en conjunto con los daños provocados a dicha unidad policial y también respecto del homicidio frustrado de Hinzpeter Kirberg, toda vez que provendrían de un mismo hecho, esto es, pluralidad de resultados lesivos provenientes de una misma acción. En rigor, se dice, se trata de una entrega de encomienda explosiva a una sucursal de la empresa de Correos de Chile.

**Vigésimo Sexto:** Sobre el punto, la sentencia en el apartado centésimo décimo tercero indicó a la pretensión de la defensa que se aplique el concurso ideal, lo siguiente: *“Se rechaza esta pretensión por el hecho de que para tal efecto bastan las argumentaciones vertidas al momento de pronunciarse respecto de la configuración de los ilícitos previstos y sancionados en la Ley 17.798, en el sentido que se considera que el agente cometió un delito al enviar un artefacto explosivo a Guzmán Hernández; otro delito al enviar otro artefacto explosivo a Hinzpeter Kirberg; otro delito más al colocar y activar un artefacto explosivo detrás de la banca de cemento o concreto y, por último, que cometió un nuevo delito al colocar y activar un artefacto explosivo al interior del recipiente del basurero, en estos dos últimos casos al interior de los jardines del Edificio Tánica. **Por lo que acaba de expresarse, de modo alguno puede considerarse que en el despliegue del agente haya existido un solo hecho** que, a su vez, haya configurado dos o más delitos en lo que a hechos previstos y sancionados en el Ley 17.798 respecta, sin perjuicio de lo que se expondrá y determinará en la parte pertinente de la presente sentencia al momento de proceder a la fijación de las sanciones”.*

A su vez, se dijo allí mismo a continuación que se *“Solicita la aplicación de la tesis del concurso ideal tanto para el delito de lesiones a los funcionarios de Carabineros, como respecto del delito de daños, así también como para el caso del delito de homicidio ejecutado en contra de Hinzpeter Kirberg, toda vez que, según su opinión, provienen de un mismo hecho, esto es, pluralidad de resultados lesivos provenientes de una misma acción. Que por las razones que se han expresado al momento de pronunciarse respecto de la configuración de los delitos contemplados en la Ley 17.798; por los discurrimientos expresados precedentemente en este mismo motivo y por texto expreso manifestado en la letra B del artículo 17 del texto legal recién invocado, procede la imposición de sanciones independientes y separadas por cada uno de los ilícitos que se cometan mediante la conductas infractoras de la misma Ley 17.798 y, por lo mismo, se rechaza igualmente esta pretensión de la Defensa de Solar Domínguez, sin perjuicio de lo que se expondrá y determinará en la parte*



*pertinente de la presente sentencia al momento de proceder a la fijación de las sanciones”.*

**Vigésimo séptimo:** Que, entonces, según aquel predicamento no lleva razón el impugnante, desde que corresponde considerar la naturaleza del medio recursivo de nulidad utilizado, de derecho estricto, en que los hechos fijados por el tribunal de grado resultan inmutables para estos sentenciadores.

En efecto, como indica el fallo atacado, según se reprodujo, ha de estarse a las características y circunstancias de los eventos pre fijados que han sido materia de la condena, en esta sección, sucesos perfectamente diferenciables entre sí e independientes, no subsumibles consecucionalmente en la figura del artículo 75 del Código Penal.

A su vez, la norma del artículo 17 B de la Ley 17.798 es suficientemente clara y categórica en orden a que: *“Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”.*

Asimismo, ha de privilegiarse ese estatuto legal, desde que en la historia de la modificación que introdujo a la Ley de Control de Armas, la Ley 20.813 de 2015, se dejó expresamente constancia sobre los antecedentes que determinaron incorporar el artículo 14 D en la Ley 17.798, de la siguiente manera:

*“Tal como se expresó en el Oficio FN Nº 559/2014, de fecha 04 de agosto de 2014, de este Fiscal Nacional al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la H. Cámara de Diputados de Chile, en virtud del cual se emitió opinión respecto de ciertos aspectos del proyecto de ley que modifica la Ley Nº17.798, sobre control de armas (Boletín Nº 9.035-02), en el sentido de incorporar como delito autónomo o independiente la colocación, uso o detonación de artefactos explosivos, existiría un verdadero vacío normativo en relación a la sanción de estas conductas. En efecto, dicha conducta sólo se encuentra descrita y sancionada específicamente en el artículo 2º Nº 4 de la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, que exige acreditar un elemento subjetivo adicional al dolo. (...) En tanto, la calificación de una determinada conducta a título de delito terrorista, o de terrorismo, depende, en el sistema chileno, de la acreditación de esta finalidad especial descrita en el artículo 1º de la ley Nº 18.314. Cuando dicha finalidad no esté presente en el autor o no se logre acreditar en el juicio respectivo, pero sí resulte probado el hecho y la participación del acusado en éste, la única manera de sancionarlo sería reconduciendo o recalificando su conducta a la figura base -delito común-, que*



corresponda. Así, por ejemplo, si se imputara a alguna persona la comisión de un delito de homicidio en carácter terrorista y no se tuviera por acreditado que obró con la especial finalidad terrorista pero sí que dolosamente mató a otro, cabría sancionarlo como autor del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 del Código Penal. Sin embargo, la reconducción a un delito común en materia de colocación, detonación, etc. de bombas o artefactos explosivos es compleja en tanto no existe en el ordenamiento jurídico chileno ninguna norma que específicamente sancione dicha conducta. En este contexto, la Fiscalía considera que la conducta específica imputada -colocación, activación, detonación, etc.- no puede encuadrarse cabalmente en las expresiones tenencia, posesión o porte de los artículos 13 y 14 de la ley N° 17.798. Adicionalmente, la Fiscalía estima que la colocación, uso o detonación de bombas o artefactos explosivos conforma una conducta de peligro concreto adicional y portadora de un mayor disvalor que aquel relativo al mero porte o tenencia del arma prohibida, y que justificaría a priori su castigo de forma independiente. En efecto, la colocación, activación o detonación de una bomba o artefacto explosivo implica el despliegue de una conducta que, más allá del mero porte o tenencia del artefacto, está positivamente orientada a que la bomba o artefacto detone, ocasionando con ello, por regla general, lesiones o incluso la muerte de personas que se encuentren cercanas a la explosión, y daños de distinta naturaleza en los bienes adyacentes a la misma” (Historia de la Ley 20.813, Biblioteca del Congreso Nacional, páginas 374 y 375).

Posteriormente, en la discusión de este tópico, las actas dan constancia de los siguientes aspectos: “En primer término, el mencionado académico (Jean Pierre Matus) manifestó que sancionar la colocación de artefactos explosivos en el Código Penal no es adecuado, pues se trata de un ilícito contra la seguridad común y no contra la vida o integridad física de uno o más personas determinadas, que también podría ser afectada si el artefacto explota y daña a los transeúntes, dando lugar a una hipótesis de concurso real y no de delito calificado. Al respecto, el Honorable Senador señor Araya añadió que la figura antes mencionada sería objeto de un sistema especial de determinación de penas, distinto al general que prescribe el Código Penal, razón que también secunda la idea de considerarla en la ley de control de armas y no en el Código Penal”. (Historia de la Ley 20.813, página 451).

Después en esa misma instancia se dijo, en torno ahora al artículo 17 B de la Ley 17.798: “A continuación, recogiendo distintas inquietudes formuladas por la Comisión durante este debate en cuanto a la aplicación de las penas a los delitos sancionados por esta ley, el profesor Matus propuso incorporar un artículo 17 B,



nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 17 B.- Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en los artículos 2° y 3°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, salvo que el delito de cometa con alguna de las armas de fuego señaladas en la letra b) del artículo segundo o se hubiese empleado una de esas armas u otro de los elementos a que se refieren las letras a), c), d) y e) del artículo 2° o del artículo 3° de tan bajo calibre, poder explosivo o expansivo que no produzca un peligro para otras personas diferentes de la víctima del delito que se trate. En estos casos, sólo se impondrá el máximo del grado o el grado mayor de la pena asignada al delito más grave. (...)”

El profesor Matus explicó que esta proposición ofrece una solución a la situación que se produce a raíz de que los delitos contemplados en la ley de armas presentan también el problema común del régimen actual de determinación de penas, que se traduce en el hecho de que, por regla general, incluso penas de hasta quince años previstas por la ley para ciertos crímenes pueden terminar sufriendo importantes rebajas judiciales y sustituyéndose por sanciones de la ley N° 18.216. Además, las rebajas penológicas habilitan para salidas alternativas durante el proceso, como la suspensión condicional, que dejan al imputado sin antecedentes para una futura reincidencia. Añadió que una errada interpretación de la ley ha llevado a los tribunales a considerar que, especialmente en los tipos cometidos con armas de fuego, la pena en particular de los delitos base debiera absorber la sanción por la posesión, tenencia o porte ilegales. Esta solución, basada en los principios de la inherencia, insignificancia y non bis in ídem, es difícil de controvertir en la práctica, a pesar de que teóricamente es equivocada, dado que los delitos de porte y tenencia de armas son de carácter permanente y, además, de peligro común y, por esa razón, su comisión es independiente de si en un momento determinado se emplean para intimidar, herir o maltratar” (Historia de la Ley 20.813. páginas 457 y 458).

Por su parte el artículo 75 del Código Penal requiere según la descripción legal los siguientes elementos: Un “caso en el que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. En estos casos solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave”. Supuesto que no se produce en la especie, puesto que no se trata, según los sucesos acreditados, de un solo acontecimiento, sino de varios, como consigna el tribunal literalmente: “Por lo que acaba de expresarse, de modo alguno puede considerarse que en el despliegue del agente haya existido un solo hecho que, a su vez, haya configurado dos o más delitos”



**Causal quinta subsidiaria, en lo que concierne a la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, vinculado al concurso ideal del artículo 75 del Código Penal, por los delitos tipificados en el Código de Justicia Militar, derivados del envío de encomienda explosiva al Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Huechuraba.**

**Vigésimo Octavo:** Que, como se ha dicho anteriormente, la defensa solicitó la aplicación, en subsidio de la solicitud de concurso ideal planteada en el motivo anterior del recurso de nulidad, la aplicación de esta figura regulada en el artículo 75 del Código Penal, ahora en relación a los delitos que fueron resultado del envío de la encomienda explosiva al comisario Manuel Leonel Guzmán Hernández de la 54° comisaría de Huechuraba por los cuales fue condenado: 1. Un delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones en la persona del entonces Comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández. 2. Un delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel. 3. Un delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena. 4. Cinco delitos consumados de lesiones leves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo del Carmen Chamorro Salas, y 5. Un delito consumado de daños calificados cometido en dependencias de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile.

A su juicio, todos los delitos antes mencionados provienen de un mismo hecho, en particular en este caso y de manera indiscutida, a la pluralidad delictiva que se produce como resultado de sólo un envío de encomienda explosiva, correspondiente a la remitida al comisario Manuel Leonel Guzmán Hernández de la 54° comisaría de Huechuraba, hecho ocurrido el día 24 de julio de 2019.

En base a lo anterior, considera la regla de la absorción agravada del artículo 75 del Código Penal, en virtud de la cual se debe aplicar la pena más grave del delito más grave, en el caso concreto, su representado debió ser condenado a la pena única correspondiente al delito de homicidio frustrado de carabinero en ejercicio de sus funciones sobre la víctima Manuel Leonel Guzmán Hernández, mensurada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en 15 años de presidio mayor en su grado medio, en razón de todos los delitos



provenientes del envío de la encomienda explosiva de la 54° comisaría de Huechuraba.

De acuerdo al tenor literal del artículo 17 B de la ley 17.798, -se insiste-, las penas que correspondan en razón de los delitos castigados por este cuerpo normativo, se aplican de manera independiente de las que se impongan, a su vez, por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando los artefactos regulados en la ley de control de armas. Pero lo anterior en ningún momento implica, como razona erradamente el tribunal, que los delitos que se cometan empleando las armas u artefactos, deban acumularse materialmente entre sí de acuerdo al artículo 74 del Código Penal, impidiendo la regla de absorción agravada del concurso ideal establecido en el artículo 75 del Código Penal.

**Vigésimo noveno:** Que sobre este tópico el tribunal a quo, ante este escenario y requerimiento, argumentó en el apartado centésimo décimo tercero, cuanto se hizo cargo de la tesis del concurso ideal, que se trata de diversos hechos, perfectamente diferenciables entre sí, y que habría de estarse a la norma de punición de la letra B del artículo 17 de la Ley 17.798, que permite la imposición de sanciones independientes y separadas por cada uno de los ilícitos que se cometan, direccionándolos por lo demás delimitadamente al artículo 74 del Código Penal.

En rigor, también esta Corte adscribe a ese planteamiento, según expresa la parte primera de la referida norma de la Ley 17.798 (artículo 17 B), cuando indica: *“Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”*.

**Trigésimo:** Que en rigor entonces la quinta causal en estudio tampoco podrá prosperar.

**Causal sexta y séptima subsidiarias de la anterior en el escrito recursivo, interpuestas de manera conjunta, respecto del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por infracción en dos aspectos, del artículo 391 del Código Penal y del artículo 12 N° 1 del mismo texto.**

**Trigésimo Primero:** Como se explicó anteriormente reproduciendo el recurso, la defensa entiende que respecto de ambas causales rige el principio non bis in ídem en razón de estar consideradas, tanto la circunstancia calificante de la figura penal de homicidio calificado en el delito del envío de encomiendas explosivas, como también implícita la circunstancia agravante del homicidio simple en el otro delito de envío de encomiendas explosivas.



En el presente caso -según el recurso-, en ambas causales o variables señaladas se ha infringido el principio referido en su expresión de prohibición de la doble valoración del hecho o regla de la inherencia, que busca evitar que un mismo aspecto del objeto de juzgamiento sea considerado más de una vez en el estándar de adjudicación, en la fundamentación de la sanción cuya eventual imposición se trata.

Lo relevante es que la alevosía, reitera, se encuentra incorporada y castigada a través del delito de envío de encomiendas explosivas, lo que es parte del fundamento de la alta pena de ese delito, castigado además de manera independiente en razón del artículo 17 B de la Ley de control de armas respecto del homicidio. Sin perjuicio de que el artículo 14 D de la ley 17.798 no establece una modalidad específica respecto del envío de encomiendas explosivas, esta tampoco queda restringida. De acuerdo a un análisis exegético es posible concluir que cada uno de los aspectos de hecho referidos al envío de encomienda explosiva son inherentes a esta; de lo contrario caeríamos en el absurdo de sostener que el autor realice un actuar para ser descubierto no sólo en cuanto a su identidad sino también a la totalidad del plan criminal, debido a que es imposible ejecutarlos de una manera que no involucre un aspecto que no sea inherente al envío o evitar ser descubierto.

Sobre estos aspectos específicos ya precisados en el apartado correspondiente, el recurrente subentiende que todos y cada uno de ellos comprenden un plan delictual para evitar ser reconocido y se trataría de un mismo aspecto del objeto de juzgamiento el cual se está considerando más de una vez en el estándar de adjudicación, lo cual evidentemente vulnera el principio non bis in ídem.

Pide, en definitiva se recalifiquen los hechos acreditados en la sentencia y se condene a su representado: a) como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y b) como autor del delito de homicidio frustrado previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar; se condene a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al no concurrir la agravante del artículo 12 N° 1 del Código punitivo.

**Trigésimo segundo:** Que como se trata de una objeción que atiende a los dos ilícitos de homicidio frustrado ya enunciados, su tratamiento debe ser unívoco, habida cuenta, asimismo, de los hechos base definidos por el tribunal a quo en la perspectiva de la alevosía, sea como calificante o circunstancia agravante.



**Trigésimo tercero:** El fallo en el tantas veces citado motivo centésimo décimo tercero, asevera que sobre el “hecho N° 1 y en cuanto a la improcedencia de calificantes por ser inherentes al delito de envío de artefacto explosivo dirigido a Hinzpeter Kirberg, no puede sino que rechazarse. Primero, porque el delito frustrado de homicidio perpetrado en contra del ofendido referido, se cometió con dolo directo y en los términos plasmados en inciso 1° del artículo 17 B de la Ley 17.798, esto es, se atentó contra la vida de dicha víctima empleando uno de los elementos señalados en el artículo 3 del mismo texto legal, por lo que legalmente procede su castigo separado. Segundo, porque para entender cometido el delito previsto y sancionado en el artículo 14 D de la Ley 17.798 no se exige ninguna modalidad especial para su perpetración y, por lo tanto, se entiende que no le es inherente ninguna forma particular en su ejecución. Tercero, porque como se permite el castigo del delito de homicidio en forma paralela a la conducta constitutiva de infracción al artículo 14 D de la Ley 17.798, para determinar la forma de comisión de dicho delito contra la vida y su categorización o calificación, habrá de recurrirse a las normas previstas para el delito de homicidio. Cuarto, porque aplicando las normas pertinentes relativas al delito de homicidio, se ha considerado que, en el caso de marras, se configura sólo la calificante primera del artículo 391 del Código Penal, de la manera como latamente se discurió en la parte pertinente de esta sentencia”.

Se delinea, a su vez, en el motivo trigésimo sexto del fallo: “Que, el delito frustrado de homicidio que se analiza y de acuerdo al parecer de estos sentenciadores, operó con la concurrencia sólo de la calificante de alevosía, según pasará a explicitarse. De acuerdo al parecer de estos sentenciadores, se estima acreditada esta calificante en su doble perspectiva, esto es, haber obrado a traición por el hecho de que el agente ocultó su intención, aprovechándose de la confianza que tal ocultamiento produjo en la víctima y, por otra parte, haber obrado sobreseguro por cuanto el sujeto activo ocultó su cuerpo e identidad buscando cometer el hecho sin riesgo para sí.

En efecto, de acuerdo a la prueba rendida en la presente audiencia de juicio, quedó completamente acreditado que el sujeto activo obró a traición por el hecho de que envió el artefacto explosivo a Hinzpeter Kirberg bajo una apariencia inofensiva. Primero, porque utilizó un medio formal y de reconocimiento masivo en lo que a transporte de encomiendas se refiere, esto es, a la empresa Correos de Chile, circunstancia que hace que se genere cierto grado de confianza o tranquilidad respecto de los envíos o encomiendas que se reciben de esta empresa. Segundo, por cuanto el mecanismo que constituía el artefacto explosivo mismo lo ocultó dentro de una caja de madera rectangular que, es de



conocimiento común que original y habitualmente se utiliza para regalar botellas de vino, tal y como lo sostuvo el propio afectado Hinzpeter Kirberg. Tercero, porque el agente se ocupó de que quedara expresamente consignado, en la documentación de la empresa de transporte, que el contenido del envío consistía en un “galvano”, lo que obviamente el agente realizó para ocultar su verdadera intención y ánimo homicida, disfrazándolo de una acción por la que, normalmente, se quiere expresar algún tipo de reconocimiento o agradecimiento.

Por otra parte, también se considera que el sujeto activo obró sobreseguro por el hecho de que ocultó su cuerpo y su propia identidad, buscando cometer el hecho sin riesgo para sí. Primero, porque tal y como se advirtió en las captaciones videográficas reproducidas en la presente audiencia de juicio, al momento de concurrir a la sucursal El Bosque de Correos de Chile se apreció que el agente llevaba puesto un gorro con orejas y visera; un chalequillo rojo con huinchas reflectantes, consiguiendo con ello ocultar lo que en realidad era su cuerpo. Segundo, debido a que además de presentarse de la manera señalada en el punto anterior, al momento de encargar el envío respectivo, procedió a ocultar su propia identidad, otorgando la de una persona con la que no tenía vínculo alguno y que, por lo mismo, no contaba con su autorización o algún tipo de facultad representativa que lo habilitara para proporcionar su identidad y otros datos particulares de dicha persona -como se verá al momento de analizar la figura de usurpación de identidad-. Tercero, por el hecho de que, según se acreditó con la prueba rendida en la audiencia de juicio (lo que se expondrá y se ponderará acabadamente al momento de analizar el elemento participación) procedió a utilizar diversos vehículos de transporte, con miras a distraer todo posible seguimiento investigativo en su contra, cuestión que también es representativo, según parecer de estos Magistrados, de ocultamiento de su cuerpo y de su persona. Cuarto, porque para lograr el ocultamiento de su intervención corpórea fue que, en uno de sus traslados, luego de encargar el envío del artefacto explosivo dirigido a Hinzpeter Kirberg, procedió a deshacerse de parte de la indumentaria con la que se encontraba vestido y provisto en aquella oportunidad (cuestión que también se especificará y ponderará adecuadamente al momento del análisis relativo a la participación del sujeto activo del delito). Quinto, se considera, además, que el agente actuó sobre seguro y sin riesgo para sí, desde la perspectiva física, en cuanto a que realizó el encargo del envío de la encomienda explosiva para que ésta estallara cuando él se encontrara distante al respectivo punto de detonación. Sexto, porque debiendo estar en conocimiento de las medidas de seguridad y control existentes para el ingreso al Edificio Itaú (tal como se visualizó en el video compilado) se procuró que el contenedor del



*artefacto explosivo estuviera constituido de un material no detectable para dichas medidas de seguridad (cilindro de plástico), cuestión que, también y de acuerdo al parecer de estos sentenciadores, deja de manifiesto su ánimo de actuar sobreseguro en cuanto a la concreción del injusto se refiere.*

*Además de lo anterior, resulta útil consignar que por el hecho de que el agente obró de la manera antes dicha, especialmente bajo el prisma de obrar a traición, generó un engaño, una suerte de falsa tranquilidad, en todos aquellos que tuvieron a su alcance y en sus propias manos la mentada encomienda, obteniendo con esto que se generara un estado de indefensión, particularmente en la víctima. Para lo anterior basta recordar los dichos de los empleados repartidores de la empresa de Correos de Chile, Sebastián Andrés Celis Córdoba y Bastián Alejandro Soto Rivas, en cuanto señalaron, en otras palabras, que procedieron a cargar y entregar la mentada encomienda como una más de las que debían repartir. También, los asertos de los empleados de la empresa Quiñenco, Dalmiro Carlos Arque Reyes, Guillermo Javier Espíndola Donoso y Malva Patricia Gaona Núñez, en cuanto al hecho de haber recepcionado, transportado, recibido, mantenido e ingresado la mentada encomienda a la oficina del destinatario, respectivamente. Además, resultó de relevancia para el presente análisis el testimonio del ofendido Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg quien señaló haber apreciado la encomienda dirigida hacia su persona y que, por la forma de dicho paquete, se representó y asumió que “tenía la apariencia de una caja con botella de vino, envuelto en un papel de color café claro, pensando que se trataba de un regalo que alguien gentilmente le hubiera enviado”.*

*Ahora, la importancia de lo consignado en el párrafo inmediatamente anterior, obedece a que por la forma del despliegue del agente, especialmente bajo el prisma de obrar a traición, generó en los receptores y en el destinatario de la encomienda explosiva un engaño, el que obviamente el agente buscaba para inducir de esta manera a que la víctima, bajo el engaño que produjo el ocultamiento, procediera a la apertura de la mentada caja y con esto su detonación y, consecuentemente, el deceso de Hinzpeter Kirberg, evento que no tuvo lugar -como ya se plasmó previamente- única y exclusivamente porque el destinatario, no obstante su persistente intención, se vio envuelto en una dinámica de actividades dentro de su desarrollo laboral que le impidieron obrar de la manera como pretendía el agente y como el propio afectado anhelaba realizar, por lo que se estima que el engaño provocado por el ocultamiento antes dicho generó una falsa confianza y con ello un estado de indefensión de la víctima, todo lo que generó un escenario propicio e ideal para el despliegue mortal”*



**Trigésimo Cuarto:** Que ahora en lo relativo a la circunstancia agravante de alevosía del artículo 12 N° 1 del Código Penal, el fallo discurre en el considerando centésimo décimo cuarto: *“Que se acoge la concurrencia de la agravante del artículo 12 N° 1 del Código Penal, esto es, cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. La decisión anterior obedece a que, de acuerdo al parecer de estos sentenciadores, se estima acreditada esta agravante en su doble significación, esto es, haber obrado a traición por el hecho de que el agente ocultó su intención, aprovechándose de la confianza que tal ocultamiento produjo en la víctima. En efecto, se estima que el inculcado obró de la manera referida por el hecho de que envió el artefacto explosivo a Guzmán Hernández bajo una apariencia inofensiva. Primero, porque utilizó un medio formal y de reconocimiento masivo en lo que a transporte de encomiendas se refiere, esto es, a la empresa Correos de Chile, circunstancia que hace que se genere cierto grado de confianza o tranquilidad respecto de los envíos o encomiendas que se reciben de esta empresa. Segundo, por cuanto el mecanismo que constituía el artefacto explosivo mismo lo ocultó dentro de una caja de madera rectangular que, es de conocimiento común que original y habitualmente se utiliza como “típica caja de vinos”, tal como lo sostuvo el propio afectado Guzmán Hernández. Tercero, porque el agente se ocupó de que quedara expresamente consignado, en la documentación de la empresa de transporte, que el contenido del envío consistía en un “galvano”, lo que obviamente el agente realizó para ocultar su verdadera intención y ánimo homicida, disfrazándolo de una acción por la que, normalmente, se quiere expresar algún tipo de reconocimiento o agradecimiento, engaño que fue advertido tanto por Guzmán Hernández como por Aguayo Montiel.*

*Por otra parte, también se considera que el sujeto activo obró sobre seguro por el hecho de que ocultó su cuerpo y su propia identidad, buscando cometer el hecho sin riesgo para sí. Primero, porque tal y como se apreció en las captaciones videográficas reproducidas en la presente audiencia de juicio, al momento de concurrir a la sucursal El Bosque de Correos de Chile se apreció que el agente llevaba puesto un gorro con orejas y visera; un chalequillo rojo con huinchas reflectantes y aparentando tener un abdomen abultado, característica que no le corresponde al inculcado, consiguiendo con ello ocultar lo que en realidad era su cuerpo. Segundo, debido a que además de presentarse de la manera señalada en el punto anterior, al momento de encargarse del envío respectivo, procedió a ocultar su propia identidad, otorgando la de una persona con la que no tenía vínculo alguno y que, por lo mismo, no contaba con su autorización o algún tipo de facultad representativa que lo habilitara para proporcionar su identidad y otros*



*datos particulares de Sandra Mutis Tapia. Tercero, por el hecho de que, según se acreditó con la prueba rendida en la audiencia, procedió a utilizar más de un vehículo de transporte, con miras a distraer todo posible seguimiento investigativo en su contra, cuestión que también es representativo, según parecer de estos enjuiciadores, de ocultamiento de su cuerpo y de su persona. Cuarto, porque para lograr el ocultamiento de su intervención corpórea fue que en uno de sus traslados, luego de encargar el envío del artefacto explosivo dirigido a Guzmán Hernández, procedió a deshacerse de, al menos, parte de la indumentaria con la que se encontraba vestido y provisto en aquella oportunidad. Quinto, se considera, además, que el agente actuó sobre seguro y sin riesgo para sí, desde la perspectiva física, en cuanto a que realizó el encargo de los envíos de las encomiendas explosivas para que éstas estallaran cuando él se encontrara distante al respectivo punto de detonación.*

*Además de lo anterior, resulta útil consignar que por el hecho de que el agente obró de la manera antes dicha, especialmente bajo el prisma de obrar a traición, generó un engaño, una suerte de falsa tranquilidad, en todos aquellos que tuvieron a su alcance y en sus propias manos la mentada encomienda, obteniendo con esto que se generara un estado de indefensión particularmente en la víctima. Para lo anterior basta recordar los dichos de los empleados repartidores de la empresa de Correos de Chile, Pablo César Carrasco Bascur y Leslie Carolina Sáenz Cifuentes en cuanto a que procedieron a cargar y entregar la mentada encomienda sin sospecha alguna. También, los asertos de los funcionarios Patricio Alejandro Sandoval Carrasco y José Luis Aguayo Montiel por cuanto el primero, que se encontraba de vigilante exterior en la Comisaría, permitió el ingreso de la peoneta a la unidad policial y el segundo fue quien recibió y entregó la encomienda al destinatario. Además, resultó de relevancia para el presente análisis el testimonio del afectado Manuel Leonel Guzmán Hernández quien señaló haber recibido la encomienda de Aguayo Montiel y que era la “típica caja de vinos” por lo que procedió a su apertura, provocándose su detonación, por lo que se estima que el engaño provocado por el ocultamiento antes dicho generó una falsa confianza y con ello un estado de indefensión de la víctima, todo lo que generó un escenario propicio e ideal para el despliegue mortal perseguido por el agente”.*

**Trigésimo Quinto:** Que, consecuentemente, lo cierto es que como lo reconoce la propia defensa, el delito previsto y sancionado en el artículo 14 D de la Ley 17.798 no exige ninguna modalidad externa especial para su perpetración y, por lo tanto, se entiende que no le es inherente ninguna forma particular ajena al núcleo típico atingente.



De tal manera, mal puede entenderse vulnerado el principio del non bis ídem que resguarda acertadamente la prohibición de la doble valoración del hecho o regla de la inherencia, que busca evitar que un mismo aspecto del objeto de juzgamiento sea considerado más de una vez en el estándar de adjudicación, en la fundamentación de la sanción cuya eventual imposición se trata.

En ese entendido las circunstancias de hecho concomitantes a los delitos de envío de artefactos explosivos, previstos en el artículo 14 D de la Ley 17.798, pueden ser consideradas de manera separada a la conducta nuclear del tipo de que se trata, y configurar como lo permite el artículo 17 B de la Ley 17.798, en el estadio ahora del delito común de homicidio frustrado, sea una calificante de aquellas del artículo 391 N° 1 circunstancia primera, o la agravante del artículo 12 N° 1, ambas del Código Penal.

En tanto, ciertamente, las conductas desplegadas por el hechor para obtener su designio criminoso de atentar contra la vida de Rodrigo Hinzpeter Kirberg y de Manuel Guzmán Hernández, y que se reproducen más arriba en este mismo apartado, pueden constituir aquellas modalidades de actuar a traición y sobre seguro, como lo entendió acertadamente la sentencia materia del recurso.

**Trigésimo Sexto:** Que lo dicho es coincidente con el tratamiento de la alevosía en la doctrina y también en la jurisprudencia de la Excma Corte Suprema y de esta Corte, en cuanto se entiende presente cuando se trata de una acción realizada "empleando medios, modos o formas en la ejecución de un hecho, que tiendan directa y especialmente a asegurarlo sin riesgo para el ofensor, que proceda de la defensa que pudiera presentar el ofendido" (Matus Acuña, Jean Pierre, Código Penal Sistematizado con Jurisprudencia, Editorial Abeledo Perrot, 2011, p. 413).

Por su parte, la jurisprudencia ha sostenido que el obrar alevoso "significa que el sujeto activo procede sin aventurarse a ningún riesgo, ya sea creando o aprovechándose de las circunstancias de hecho que le permitan evitarlo con el propósito de asegurar su acción (C.S. Rol 4306-07, de 19.05.2008).

Lo anterior pone de manifiesto que para que proceda la calificación contemplada en la circunstancia primera del N° 1° del artículo 391 del Código Penal la conducta desplegada por el o los autores debe estar revestida de condiciones que impidan la respuesta de la víctima por encontrarse en situación de indefensión y que aseguren la indemnidad de la persona del victimario, debiendo dichos elementos derivar de los hechos que son motivo de la acusación.

La doctrina ha señalado que tanto en la actuación traicionera como en el proceder sobre seguro, no basta con el elemento material u objetivo de la indefensión de la víctima, sino que es imprescindible que el hechor haya buscado



de propósito esa situación favorable para cometer específicamente el delito en ese contexto. La agravante no se configura con el hecho de que objetivamente se den las circunstancias favorables que le son inherentes; requiere además que el sujeto actúe con un especial ánimo, "ánimo alevoso", elemento subjetivo que implica el buscar o procurar ex profeso circunstancias especialmente favorables y no simplemente servirse o aprovecharse de ellas cuando estén dadas. Así lo ha resuelto también nuestra jurisprudencia al señalar que "el simple azar de circunstancias favorables no es motivo suficiente para estimar que un homicidio ha sido cometido con alevosía."

**Causal octava subsidiaria en el recurso, dirigida según la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, y vinculada al artículo 11 N° 9 del Código Penal.**

**Trigésimo Octavo:** Que se arguye por la defensa que la sentencia recurrida ha hecho una errónea aplicación del derecho al desestimar la concurrencia de la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, "haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos."

La actuación aludida precedentemente no se ajustaría a derecho por las siguientes circunstancias que se encarga de especificar detalladamente: A. Declaración Inculpatoria; B. Renuncia del derecho a guardar silencio; C. Renuncia a la presunción de inocencia; y, D. Sustancialidad de la colaboración.

Acude al Profesor Juan Pablo Mañalich, - cuando expresa refiriéndose a las atenuantes contempladas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 11: "el comportamiento posterior al hecho punible por parte del imputado puede llegar a exhibir fuerza atenuante cuando ese comportamiento es expresivo de un ejercicio supererogatorio de fidelidad a derecho por parte de quien resulta responsable de un quebrantamiento del derecho, en términos tales que la correspondiente reacción punitiva en cuestión puede verse modulada, de modo favorable al imputado, en atención a esa muestra -tardía- de fidelidad a derecho".

El acusado, espeta, declaró en la investigación, meses antes del cierre de esta. Declaró además en estrado, permitiendo conocer su postura en relación a los Hechos. En ningún caso puede ser considerada exculpatoria respecto de la coimputada, ya que, de ser así, no hubiese declarado en las dos oportunidades. Se aportaron mayores antecedentes, incluso en relación con el caso de España. A su vez, se aportó la forma exacta de la fabricación de los artefactos explosivos, lo cual logró superar la falta de información, que si bien el fallo sostiene que es intrascendente, lo cierto es que tres de los artefactos detonaron y al ser considerada la calificante de alevosía respecto del homicidio calificado, la única



manera de dar por cierto el hecho de que en la fabricación utilizó un contenedor de plástico para evitar ser descubierto por cuanto debía conocer las medidas de seguridad del edificio Itau, es mediante su declaración que dio cuenta de haber concurrido y observado dicho lugar con anterioridad al envío. Como señaló el oficial investigador, Sr. Nicolás Aliaga, el encartado se refirió en dónde y a través de quien adquirió la dinamita utilizada en el Hecho 1, lo cual derivó en diligencias que confirmaron la existencia de un sujeto con el apodo otorgado, que trabajó en minería y que figuraba en el registro de detenidos. Y también tuvo una actitud de colaboración indesmentible, se dice, en relación a la definición de la participación de la co-imputada Mónica Caballero.

**Trigésimo Noveno:** Que, al respecto, la sentencia en el apartado centésimo décimo cuarto, refiere: *“Que se rechaza tener por satisfecha la morigerante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Lo que acaba de plasmarse obedece a que los delitos que han podido tenerse por establecidos, todos y cada uno de ellos, lo han sido, única y exclusivamente, en virtud de la prueba de cargo que se ha rendido, en lo que el inculcado no ha tenido injerencia alguna.*

*Ahora, si bien es cierto que el inculcado renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración en la oportunidad prevista en el inciso 3° del artículo 326 del Código Procesal Penal y mediante ésta reconoció su participación en los hechos por los cuales se dedujo acusación en su contra, lo cierto es que todo aquello se configuró, como ya se dijo, con la abundante e ilustrativa prueba rendida por el persecutor.*

*Además, el propio inculcado reconoció que sólo recién en el mes de diciembre del año 2021 fue que prestó declaración en etapa investigativa y, preguntado por el fiscal de la audiencia, respondió que de lo que declaró en aquella oportunidad y que no estaba en la carpeta investigativa, por una parte, consistía en cuanto a que la dinamita, la mecha y el detonador que utilizó para el artefacto explosivo enviado a Hinzpeter Kirberg los había obtenido de un sujeto que mencionó como “Moncho” a quien conoció en el Valle del Elqui, pero al mismo tiempo el propio enjuiciado reconoció que tal individuo no había podido ser ubicado. Ahora, de haberse ubicado a tal sujeto, según opinión de estos Magistrados, en nada habrían variado las circunstancias, toda vez que no fue objeto de juzgamiento el lugar o forma de obtención de tales elementos, como tampoco el hecho de haber obtenido lícita o ilícitamente tales objetos o el haber fabricado el mecanismo explosivo, sino que lo que fue sometido a enjuiciamiento fue el hecho de haber enviado, en el caso puntual, una encomienda explosiva,*



*cuestión que se comprobó solamente en virtud de la prueba de cargo, tal como ya se ha plasmado.*

*Por otra parte, en cuanto a haber situado a la inculpada como asistente para maquillarlo, confeccionarle el vientre falso, acompañarlo a las cercanías de Tánica S.A. y luego haber efectuado los llamados para dar aviso de la instalación de los artefactos explosivos, tampoco surtió el efecto esperado por su Defensa, puesto que la participación de Caballero Sepúlveda se estimó acreditada, igualmente, sólo en base a la prueba de cargo, de la manera como se ha razonado en el presente fallo. Además y desde otra perspectiva, se considera que los postulados del sentenciado no pueden considerarse como una colaboración (mucho menos sustancial), toda vez que no obstante señalar lo que dijo respecto a Caballero Sepúlveda en cuanto a la intervención de ésta en el hecho signado con el N° 2, en todo momento, repetida y categóricamente, negó que la enjuiciada hubiera tenido conocimiento y voluntad en participar de tal ilícito, aseveraciones que son contrarias a la convicción del Tribunal, motivo por el que se considera que más que un aporte, aquello sirvió de una pretendida herramienta ganancial para, de una parte, intentar exculpar a la encausada y, de otra parte, con el fin de postular a una atenuante, por lo que, en realidad, esta parte de sus dichos tampoco, realmente, constituyen un aporte, sino que –según parecer de estos Jueces- sirvió más bien de un medio para intentar confundir a estos enjuiciadores.*

*Puntualmente y en cuanto al hecho de haber reconocido que él fabricó los artefactos explosivos artesanales; que Mónica Caballero fue quien lo maquilló y le fabricó un abdomen abultado falso; que fue él quien publicó las adjudicaciones tanto para el hecho N° 1 como para el hecho N° 2; que reveló cuales fueron las motivaciones para haber procedido de la manera por la cual se le condenó y que él fue quien otorgó las ubicaciones de los ciber café desde donde habría publicado, vía internet, las mentadas “adjudicaciones”, todas estas aseveraciones no han sido refrendadas por prueba alguna, por lo mismo es que se consideran que son completamente inocuas. Es más, carece de completa importancia el hecho de que Solar Domínguez haya fabricado dichos artefactos explosivos desde que por aquella conducta específica no ha sido acusado ni condenado y, a su turno, respecto de las mentadas “adjudicaciones” se ha procedido a desestimar la instrumental en las que se contienen, por las razones que se han consignado previamente en el presente fallo, a lo que debe sumarse el hecho que es completamente irrelevante los lugares desde donde, se supone, habría publicado dichas “adjudicaciones”, toda vez que ello no constituye materia que haya sido sometida al presente enjuiciamiento.*



*A su vez y en cuanto a las alegaciones de la Defensa respecto a que Aliaga Montoya sostuvo que el encartado había prestado una declaración extensa y que los acusadores se sirvieron de las “adjudicaciones” para formular parte de sus alegaciones, no reviste ninguna significación para estos sentenciadores, debiéndose entender que dichos puntos constituyen opiniones de terceros que son inoponibles a estos Jueces. Por lo demás y en cuanto a “adjudicaciones” se refiere, aquello carece completamente de importancia por el hecho de haberse desestimado dicha prueba, por las razones plasmadas oportunamente, a cuya parte del fallo habrá de estarse para no incurrir en repeticiones inoficiosas.*

*El defensor sostuvo que Solar Domínguez y Caballero Sepúlveda cooperaron puesto que no se opusieron a colaborar en cuanto al hecho de Vitacura, entendiendo el Tribunal que aquello no reviste la significación que se pretende otorgarle, porque si a lo que se refirió el defensor fue a las muestras que mediante punción capilar se les tomó a los sentenciados mientras se mantenían en prisión preventiva, aquello operó con autorización judicial, sin que se haya presentado prueba alguna o antecedente que dé cuenta que ellos, los inculpatos, fueron los que manifestaron iniciativa en tal emprendimiento.*

*A su turno, el defensor destacó una eventual contradicción en el relato proporcionado por el testigo Luis Santiago Soto Pérez ante personal investigativo, sin embargo y para los sentenciadores aquello sólo consistió en la especificación de la intersección en donde dicho taxista tomó a Caballero Sepúlveda, no a Solar Domínguez, cuestión que por lo demás el propio testigo se encargó de aclarar al ser contrainterrogado por el defensor, señalando que en una primera declaración, ante personal investigativo, había señalado que tomó a la pasajera en la intersección de Avenida Américo Vespucio con Los Militares y en una segunda declaración, también ante personal investigativo, rectificó que lo fue en Avenida Américo Vespucio con Francisco de Aguirre. Pues bien, puede concederse al defensor que hubo esta corrección, pero estos sentenciadores no lo entienden como necesariamente una contradicción, así como tampoco avizoran la trascendencia de aquello, ni mucho menos qué contribución podría haber de parte de Solar Domínguez en contraste con la prueba rendida en el juicio, en aquel punto en relación con la mitigante que se analiza.*

*El defensor destacó que Solar Domínguez había cooperado a tal punto que incluso reconoció el hecho de haber sido condenado anteriormente en España. Al respecto, estos sentenciadores estiman que aquello carece de toda relevancia. Primero, porque dichos hechos no han sido sometidos al conocimiento y resolución de estos Magistrados, por lo que desde esta perspectiva no se vislumbra de qué manera aquello pudo haber contribuido al esclarecimiento de los*



*hechos que sirvieron de sustento a la acusación que dio origen al presente juicio oral. Segundo, porque dicha misma circunstancia fue profusamente acreditada por el persecutor.*

*Por último, se considera que si el enjuiciado hubiera hecho uso de su derecho a guardar silencio, estos sentenciadores igualmente y sin duda alguna, hubieran arribado a las mismas decisiones de condena por cada uno de los delitos que se han tenido por acreditados, no sólo respecto de su persona sino que también respecto de Caballero Sepúlveda, bastando una somera lectura del fallo para advertir que su relato no tuvo injerencia alguna en las decisiones adoptadas por esta sede”.*

**Cuadragésimo:** Que, sobre este último tópico recursivo, ha de tenerse en cuenta la doctrina de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema (desde el fallo de fecha diecinueve de julio de dos mil cinco, en causa Rol N° 2005-05 de ese máximo tribunal) que la “colaboración substancial” a que alude el artículo 11 N° 9 del Código Penal, constituye uno de aquellos “*criterios cuantitativos indefinidos por cuyo intermedio se entrega a los jueces una amplia facultad y discrecionalidad, las más de las veces ajena a un control como el que permite el recurso extraordinario intentado y sólo cuestionable cuando se sobrepasa el límite de los contornos no difusos del concepto regulativo de que se trata*”.

**Cuadragésimo Primero:** Que en esa dirección, el tribunal de grado desestima la minorante según se refirió ya latamente al considerar la ausencia de relevancia y sustancialidad en la actitud supuestamente cooperadora del imputado, dada la prueba de cargo existente.

De allí, aunque preliminarmente no amerita intervenir en el ámbito de la facultad de los jueces cuando ponderan sin exceso las circunstancias de hecho ya anotadas en esos criterios cuantitativos, lo cierto es que se observa que en la resolución recurrida y en el procedimiento empleado por el que se atiende a los elementos de facto existentes para el rechazo de la atenuante, se operó sobre la base de una situación perfectamente definida que es congruente con las exigencias de la norma, lo que propició la convicción que obtiene el fallo en orden a desechar que concurra la colaboración substancial del imputado.

**Cuadragésimo segundo:** Que, por todo lo ya extensamente anotado, y no concurriendo las causales de abrogación utilizadas por la defensa del condenado Solar Domínguez, se desechará su impugnación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 372, 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por los defensores Nicolás Toro Vergara y Humberto Lemaire



Silva, en representación del imputado Francisco Javier Solar Domínguez y en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés, dictada en la causa Rit 107-2023 del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que en consecuencia no es nula.

**Acordado lo anterior, contra el voto del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares**, quién estima del caso acoger el recurso de nulidad en lo relativo a su causal tercera, de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 351 del mismo Código, en sus dos vertientes, -aunque comparte la desestimación de las causales segunda, cuarta, sexta, séptima y octava, del libelo abrogatorio de la defensa, no obstante la fórmula de subsidiariedad que se emplea en el arbitrio.

Correspondería, entonces, anular parcialmente la sentencia recurrida y dictar una de remplazo que impusiera al acusado Francisco Javier Solar Domínguez, las siguientes sanciones:

**1. A la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo**, como autor de calidad de autor de dos delitos consumados de envío de encomienda explosiva, previstos y sancionados en el artículo 14 D, inciso 1°, parte final, de la ley 17.798, cometidos con fecha 24 de julio de 2019 en la comuna de El Bosque.

**2. A la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo** en calidad de autor de dos delitos consumados de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, previstos y sancionados en el artículo 14 D, inciso 1°, primera parte, de la ley 17.798, perpetrados con fecha 27 de febrero de 2020 en la comuna de Vitacura.

**3. A la pena única de veinte años de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por corresponderle participación en calidad de autor por los siguientes ilícitos: **A.** Del delito frustrado de homicidio de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones, en la persona del entonces comisario de la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Huechuraba, Manuel Leonel Guzmán Hernández, cometido con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba, **B.** Del delito frustrado de homicidio calificado en la persona de Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg perpetrado con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Las Condes, **C.** Del delito consumado de lesiones graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo



Montiel con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba, **D.** Del delito consumado de lesiones menos graves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba, **E.** De cinco delitos consumados de lesiones leves de carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo Del Carmen Chamorro Salas, ilícitos perpetrados con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba.

**4. A la pena de ochocientos dieciocho días de reclusión menor en su grado medio, al pago de una multa de ocho unidades tributarias mensuales y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por corresponderle participación en calidad de autor del delito consumado de daños calificados cometido en dependencias de la 54° comisaría de Carabineros de Chile, ilícito cometido con fecha 25 de julio de 2019 en la comuna de Huechuraba,**

Todo, por los fundamentos que se pasan a expresar:

**A.** Los hechos materia de la acusación y que han sido dado por acreditados por el tribunal a quo, como hemos visto, pueden clasificarse jurídicamente de la siguiente manera:

Se trata de: a) Dos delitos de envío de encomienda explosiva, previstos en el artículo 14 D, inciso primero, parte final de la Ley 17.798, b) Dos delitos de colocación y activación de artefactos explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, tipificados según el artículo 14 D, inciso primero, primera parte, de la ley 17.798, c) Un delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera, del Código Penal, d) Ocho delitos previstos en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, cometidos en perjuicio de funcionarios de Carabineros de Chile en ejercicio de sus funciones, y e) Un delito de daños calificados previsto en los artículos 486 y 485 N° 1 del Código Penal.

**B.** En ese contexto, nos encontramos con delitos referidos en la Ley 17.798, separados en dos grupos binarios, a saber, dos ilícitos de envío de encomienda explosiva, y dos delitos de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público. También delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar. Y por últimos aquellos tipificados en el Código Penal.

#### **Delitos de la Ley 17.798.**



c. Con respecto a los delitos previstos en la ley 17.798 y materia de la acusación, perfectamente ellos pueden ser clasificados en dos vertientes que, aunque similares, presentan circunstancias disimiles, al menos en el carácter que conllevan, como también en su tipificación y regulación. Así el legislador formula esa distinción en el artículo 14 D de la Ley 17.798. En tales condiciones, a los efectos de la aplicación de las sanciones, se distinguirá por categoría.

D. Que, enseguida, ha de atenderse a las reglas de penalidad que se describen en la Ley 17.798, con respecto a este tipo de infracciones. El precepto 17 B, en su inciso primero articula, dada su naturaleza y objetivos de política criminal contemplados en la Ley 20.813 que le introduce, también especiales fórmulas de castigo cuando enuncia: *“Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. Para determinar la pena en los delitos previstos en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y 14 D, y en todos los casos en que se cometa un delito o cuasidelito empleando alguna de las armas o elementos mencionados en el inciso anterior, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51 a 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley N°20.084 y en las demás disposiciones de esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar dicha pena....”*.

En este contexto la norma punitiva en su inciso primero redirige al artículo 74 del Código Penal, cuando en concurso con los delitos de la Ley 17.798 se cometan otros delitos y cuasidelitos empleando los medios de comisión que enuncia -que es del caso-; pero dicha hipótesis obviamente no excluye la aplicación del artículo 351 del Código Procesal cuando fuere procedente. Así lo entendió, teóricamente tanto el fallo del Sexto Tribunal Oral en lo Penal en examen, como la sentencia de mayoría que ahora se pronuncia, no obstante preterir la norma del código procesal por hallar más favorable la opción del artículo 74 del Código Penal.

La doctrina igualmente comparte esta tesis, cuando refiriéndose al citado artículo 17 B en su relación con el artículo 351 señala: *“Esta regla queda a salvo*



*pues la norma de la ley de control de armas solo ordena aplicar el tratamiento del concurso real de delitos, esto, acumulación de penas, lo que no implica establecer excepciones a las excepciones a la acumulación material y que vendrían dadas por el principio de asperación establecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal” (La Ley N° 17.798, sobre control de armas. Problemas de aplicación tras la reforma de la Ley 20.813”, Profesora Myrna Villegas Díaz, Revista Política Criminal, volumen 14 N° 28, diciembre de 2019, página 33).*

E. En definitiva, sentados los elementos de consenso, lo que no comparte este disidente es la imposición de penas separadas para cada uno de los cuatro delitos regulados en la Ley 17.798, asumiendo los jueces que el parámetro de exasperación del precitado artículo 351 del Código Procesal conduciría a una sanción mayor de presidio perpetuo en vez de las penas individuales que permite el artículo 74 del Código Penal. Habida cuenta además que el particular criterio que la sentencia de grado utiliza para subir idealmente en dos grados la penalidad base en la perspectiva de acumulación, son únicamente consideraciones relativas a los dos delitos de envío de encomiendas explosivas, según reza el motivo centésimo décimo quinto del fallo, cuando alude a las encomiendas o entregas a domicilio y a la ampliación de las medidas de seguridad en Correos de Chile, obviando ponderar los otros ilícitos de la Ley 17.798.

Lo cierto es que en un ejercicio de tratamiento diferenciado con pena única para dos delitos de envíos de encomienda explosiva, y pena única también para dos delitos de colocación y activación de artefacto explosivo desde la vía pública y en edificio de libre acceso al público, se llega a una sanción menor que la que dispuso el tribunal a quo. Y ello hace perfectamente procedente un asilo en el procedimiento del artículo 351 del Código Procesal Penal por sobre aquel del artículo 74 ya tantas veces citado.

F. La pena basal entonces por cada grupo, es la de presidio mayor en su grado medio, y por la reiteración, en cada caso binario, se llega a dos sanciones únicas de presidio mayor en su grado máximo, dada la reiteración.

### **Delitos contra la vida y la salud de las personas, a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal.**

G. Que, a su turno, en el segundo aspecto que comprende la causal tercera, de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 351 del mismo Código, ahora por los delitos contra la vida y la salud de las personas, también es pacífico que su tratamiento ha de ser diferenciado de los delitos base configurados en la Ley 17.798.



En efecto, así lo hace la sentencia objetada aunque con penas individuales y lo ratifica la historia de la Ley 20.813, como se dijo, tanto como la jurisprudencia y la doctrina de los autores. Al canto, solo una mención de lo dicho por el profesor Gonzalo Bascur Retamal, cuando advierte: *“La incorporación de la regla concursal especial del artículo 17 B inciso primero de la Ley de control de armas ha venido a subsanar el controvertido caso en que mediante un solo hecho doloso se realizan multiplicidad de resultados lesivos (...) supuesto que de acuerdo a las reglas generales debería ser considerado un concurso ideal homogéneo (artículo 75 CP), lo cual ha sido criticado por considerarse en forma mayoritaria un supuesto cuya gravedad ameritaría- según una parte relevante de la doctrina- el tratamiento asignado al concurso real de delitos (artículos 74 CP o 351 del CPP). De esta forma actualmente las penas individuales por cada infracción se acumularían sucesivamente...”*. Y agrega: *“Desde la perspectiva de la utilización de los objetos previstos en la Ley de control de armas, ello se traduce en que el acto de empleo de un elemento lesivo generaría una dimensión de riesgo para otros bienes jurídicos que no podría ser agotada en la valoración de un resultado lesivo sobre un bien jurídico individual, por cuanto existirían dos menoscabos paralelos e independientes a ser considerados en la sentencia: un atentado contra la seguridad colectiva y otro contra algún interés individual, como la vida o la propiedad”*. (Análisis de los principales delitos y su régimen de sanción previsto en la Ley N° 17,798 sobre Control de Armas, Revista Política Criminal, volumen 12 N° 23, julio 2017, páginas 583 y 597).

Así quedó registrado también en la Historia de la Ley 20.813, cuando el profesor Jean Pierre Matus, argumentó: *“...esta proposición ofrece una solución a la situación que se produce a raíz de que los delitos contemplados en la ley de armas presentan también el problema común del régimen actual de determinación de penas, que se traduce en el hecho de que, por regla general, incluso penas de hasta quince años previstas por la ley para ciertos crímenes pueden terminar sufriendo importantes rebajas judiciales y sustituyéndose por sanciones de la ley N° 18.216. Además, las rebajas penológicas habilitan para salidas alternativas durante el proceso, como la suspensión condicional, que dejan al imputado sin antecedentes para una futura reincidencia. Añadió que una errada interpretación de la ley ha llevado a los tribunales a considerar que, especialmente en los tipos cometidos con armas de fuego, la pena en particular de los delitos base debiera absorber la sanción por la posesión, tenencia o porte ilegales. Esta solución, basada en los principios de la inherencia, insignificancia y non bis in ídem, es difícil de controvertir en la práctica, a pesar de que teóricamente es equivocada, dado que los delito de porte y tenencia de armas son de carácter permanente y,*



además, de peligro común y, por esa razón, su comisión es independiente de si en un momento determinado se emplean para intimidar, herir o maltratar” (Historia de la Ley 20.813, Biblioteca del Congreso Nacional, páginas 457 y 458).

H. Que, enseguida, a diferencia de cómo lo entienden los sentenciadores de grado y esta Corte en la decisión de mayoría, cuando se discurre sobre la aplicación de la acumulación material del artículo 351 del Código Procesal Penal atinente a los delitos contra la vida y la salud, -por lo demás conjuntamente tratados en el Título VIII del Libro II del Código Penal-, la mención de esta norma referida a “reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie”, supone entre ellos una convergencia nuclear y no total de bienes jurídicos protegidos, puesto que basta que alguno de aquellos bienes jurídicos sea común de entre los resguardados en las diversas hipótesis.

Es la tesis doctrinaria que cita la defensa, acudiendo al profesor Jean Pierre Matus en su obra *“Proposiciones respecto de las cuestiones no resueltas por la Ley N° 20.084 en materia de acumulación y orden de cumplimiento de las penas”*, cuando aludiendo al artículo 351 del Código Procesal Penal indica: *“... la aplicación de esta regla, que no contiene una definición de bien jurídico operativa, producirá diversas interpretaciones, particularmente por el hecho de que muchos delitos no protegen “un” único bien jurídico, sino varios y que, aunque se dé el caso de dos o más delitos que protejan “un” mismo bien jurídico, nada impide que cada uno de ellos proteja o no, además, otros bienes jurídicos. Para estos casos, también podría ser posible extender la aplicación de este artículo a los supuestos en que, existiendo delitos que afecten más de “un mismo” bien jurídico, al menos tengan en común la protección de “un mismo” bien jurídico de entre todos los afectados, como sería el caso de reiteración de delitos contra la propiedad (hurtos y robos) o incluso, entre robos violentos con lesiones y homicidios, según los casos, siendo aquí el “mismo bien jurídico” protegido la vida y la salud de las personas, y no la propiedad...”*. (En: *Ius et Praxis* año 14 N°2, 2008 pp. 525-559).

Visión compartida también por profesor Guillermo Oliver Calderón, de la siguiente manera: *“... Según mi opinión, el recurso a la función sistemática de los bienes jurídicos, conforme a la cual el legislador clasifica los distintos delitos dentro del Código Penal, permite sostener que no es necesaria una identidad exacta de bienes jurídicos afectados para considerar dos o más delitos como pertenecientes a una misma especie. Téngase en cuenta que la anterior definición de delitos de la misma especie se basaba, precisamente, en un criterio sistemático y que no era criticada por ello, sino por las indeseables consecuencias que en ocasiones producía el modo excesivamente formal en que estaba consagrado. Atender a la función sistemática de los bienes jurídicos serviría*



*entonces para “rescatar” el aspecto útil de la regulación anterior. Debido a esta función el legislador podría agrupar conjuntamente diversos delitos, aunque sus bienes jurídicos coincidieran solo parcialmente, nada impide aplicar la regla de determinación de pena de la reiteración de delitos de la misma especie a hipótesis de varios delitos pluriofensivos. Lo único que se requiere es que en todos los delitos concurrentes exista, al menos, un mismo bien jurídico común...”. (La exasperación de la pena en el concurso material de delitos: la reiteración de delitos de la misma especie, en: Revista de Derecho (Valdivia) volumen XXVI N° 2 pp. 167-188, diciembre 2013).*

I. En rigor, lo que se propone por este disidente, es penalizar conjuntamente los delitos contra la vida y salud de las personas contemplados respectivamente: De homicidio frustrado de carabinero que se encuentra en el ejercicio de funciones previsto en el artículo 416 del Código de Justicia Militar en perjuicio de Manuel Guzmán Hernández; del artículo 391 N° 1, circunstancia primera, del Código Penal, en carácter de frustrado en perjuicio de Rodrigo Hinzpeter Kirberg; de lesiones graves consumado a carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona del funcionario de Carabineros de Chile José Luis Aguayo Montiel; de lesiones menos graves consumado a carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometido en la persona de la funcionaria de Carabineros de Chile Erika del Rosario Bravo Aravena; y los cinco delitos consumados de lesiones leves a carabinero que se encuentra en ejercicio de sus funciones cometidos en las personas de los funcionarios de Carabineros de Chile Estefanía Elena Contreras Parra; José Ignacio González Parra; Valeria Yazmín Alvarado Marín; Camila Andrea Chaparro Salas y Hugo Del Carmen Chamorro Salas.

J. Así, la pena única propuesta es la presidio mayor en su grado máximo, tomando como base el delito frustrado de homicidio a carabinero que se encuentra en el ejercicio de funciones previsto en el artículo 416 del Código de Justicia Militar en perjuicio de Manuel Guzmán Hernández, con la agravación del artículo 12 N° 1 del Código Penal, para disminuir y aumentar su pena según la frustración y modificatorias de responsabilidad, desde presidio mayor en su grado medio hasta la de presidio mayor en su grado máximo en su parte superior de 20 años, atendida la reiteración de ilícitos.

#### **Delito de daños contra la propiedad en carácter de calificado**

K. Que no pudiendo comprenderse en las hipótesis anteriores el delito de daños calificados previsto y sancionado en el artículo 486 inciso primero, en relación con el artículo 485 N° 1 del Código, -dada la naturaleza- su penalidad ha



de ser separada, graduándose según lo permite el rango legal, en presidio menor en su grado medio más la sanción pecuniaria atingente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase comunicando al tribunal a quo.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

**Rol Corte N° 30-2024 Penal.**

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Roberto Ignacio Contreras Olivares, señor Luis Sepúlveda Coronado y abogado integrante señor Juan Reyes Taha. Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Reyes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.





Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNGMXXCXQP

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Roberto Ignacio Contreras O., Luis Daniel Sepúlveda C. San Miguel, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNGMXXCXQP